

***ANÁLISIS COMPARADO:
TRATAMIENTO DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL EN LOS PAÍSES
ANDINOS***

*Lic. Jorge Quevedo González
Consultor*

Febrero, 2004

ÍNDICE

<i>PRESENTACIÓN</i>	3
---------------------------	---

CAPÍTULO I: MARCO JURÍDICO

<i>I.1. PLANILLAS NACIONALES</i>	7
<i>BOLIVIA</i>	7
<i>COLOMBIA</i>	10
<i>ECUADOR</i>	13
<i>PERÚ</i>	15
<i>VENEZUELA</i>	18
<i>I.2. MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARADO</i>	20
<i>I.3. ANÁLISIS Y COMENTARIOS</i>	24

CAPÍTULO II: PROTECCIÓN DE DERECHOS

<i>II.1. SISTEMAS NACIONALES</i>	28
<i>BOLIVIA</i>	28
<i>COLOMBIA</i>	31
<i>ECUADOR</i>	35
<i>PERÚ</i>	47
<i>VENEZUELA</i>	53
<i>II.2. ANÁLISIS Y COMENTARIOS</i>	58

CAPÍTULO III: MARCO INSTITUCIONAL

<i>III.1. ÓRGANOS NACIONALES COMPETENTES</i>	62
<i>BOLIVIA</i>	62
<i>COLOMBIA</i>	66
<i>ECUADOR</i>	72
<i>PERÚ</i> 76	
<i>VENEZUELA</i>	80
<i>III.2. ANÁLISIS Y COMENTARIOS</i>	82

CAPÍTULO IV

<i>ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CASO BOLIVIANO</i>	85
--	----

ANEXO

<i>RELACIÓN DE NORMAS VIGENTES EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA</i>	89
--	----

PRESENTACIÓN

El proceso de integración subregional andino ha desarrollado una amplia normativa, que ha ido evolucionando en función del desarrollo del propio proceso, abarcando áreas y temas que involucra el carácter multidimensional del mismo. Esta normativa comunitaria tiene la connotación de ser automáticamente vinculante, de aplicación directa y con preeminencia respecto de las legislaciones nacionales, con base al principio de la supranacionalidad que caracteriza el derecho de la integración andina.

Desde el punto de vista económico -y en respaldo de los esfuerzos que se desarrollan para avanzar hacia un mercado común- la ahora denominada Comunidad Andina ha tenido una trayectoria muy importante y prolifera en la adopción normas. Dentro de este contexto, el área de la armonización de políticas ha sido trabajada desde distintas temáticas, una de ellas, la Propiedad Intelectual, que ha tenido en su tratamiento una evolución notable, hasta consagrar un verdadero cuerpo normativo.

Los antecedentes del tratamiento de la Propiedad Intelectual en este proceso de integración se remontan a la década de 1970, cuando se emitió la Decisión 24, que estableció el Régimen Común sobre el Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías. Posteriormente, la Decisión 85 al disponer el Reglamento para la Aplicación de Normas sobre Propiedad Industrial, inicia un proceso evolutivo de la norma, que prosigue con la Decisión 344 “Régimen Común sobre la Propiedad Industrial” y que – al presente- permite que la Comunidad Andina cuente con conjunto de normas, compatibilizadas plenamente con las de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que legisla sobre varios aspectos de esta temática, con las siguientes disposiciones: Régimen Común sobre Propiedad Intelectual (Decisión 486); Régimen sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decisión 351); Régimen Común de Protección de los Derechos de Obtentores Vegetales (Decisión 345), y Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos (Decisión 391).

El cuerpo normativo andino en materia de Propiedad Intelectual es de obligatoria aplicación en los países integrantes de la Comunidad Andina y, por los alcances jurídicos que tiene la norma andina, se ha convertido en la parte de mayor sustento y estabilidad de las legislaciones nacionales en esta materia.

En este contexto, el análisis comparado que contiene el presente documento pretende -a partir de los compromisos andinos- indagar sobre otras disposiciones nacionales o derivadas de otros convenios internacionales que estén aplicando los países andinos, de manera de identificar las características básicas de los marcos legislativos nacionales en el tema. Esto permitirá la identificación de similitudes o de avances pendientes para el caso boliviano.

El análisis comparado también abarca, en lo que ha permitido la información obtenida, el examen de la aplicación de las normas, lo que técnicamente se conoce como observancia de la norma, fundamentalmente, en lo que hace referencia al tipo de mecanismos y acciones que en los países andinos se desarrollan para hacer efectiva la protección de derechos. Finalmente, se examinan los modelos institucionales elegidos por cada país para la administración de la Propiedad Intelectual.

Ante la imposibilidad, por tiempo y costo, de realizar un relevamiento directo de la información en cada uno de los países andinos, para la elaboración de este “Análisis Comparado” se recurrió a fuentes de información secundarias, tales como los informes nacionales presentados en las reuniones anuales de Directores de Oficinas de Propiedad Intelectual y de Derecho de Autor de América Latina e informes de organismos regionales y subregionales de integración. Cabe destacar que, por estas circunstancias, podrían haberse omitido en el análisis normas o disposiciones de reciente emisión.

Se debe señalar que el presente trabajo forma parte de la investigación y estudio que se ha realizado sobre la Propiedad Intelectual y su desarrollo en Bolivia, mediante un contrato de consultoría, dentro del marco de las actividades del Proyecto Bolivia Competitiva en Comercio y Negocios (BCCN).

CAPITULO I
MARCO JURÍDICO

I. MARCO JURÍDICO

Este capítulo está referido al análisis comparativo de la normativa vigente y aplicable en materia de Propiedad Intelectual en cada país andino. Para ello, se ha optado por un esquema metodológico que privilegia un ordenamiento temático, el mismo que -en lo fundamental- guarda relación con las áreas temáticas legisladas dentro del ámbito de la Comunidad Andina.

Por tanto, la diversa información jurídica obtenida ha sido procesada en función de su pertenencia a los siguientes regímenes:

- Régimen de Propiedad Intelectual: en el que se consignan los instrumentos jurídicos de cada país que tengan carácter general, es decir que involucren a la Propiedad Industrial y al Derecho de autor.
- Régimen de Propiedad Industrial
- Régimen de Derecho de Autor y Derechos Conexos
- Régimen de Obtención de Variedades Vegetales
- Régimen de Acceso a Recursos Genéticos

Para facilitar el análisis, se ha volcado la información en planillas, por país, que contienen la relación de las normas vigentes, según se trate de legislación netamente nacional o que derive de convenios internacionales y de las normas andinas.

Sobre la base de estas planillas nacionales, se ha procesado una matriz de doble entrada, que por orden temático y país andino, permite comparar los avances que se registran en cada uno de ellos desde el punto de vista normativo, en materia de Propiedad Intelectual. A la luz de la información clasificada en esta matriz se formulan algunos comentarios en torno a la situación que caracteriza la legislación de los países andinos, sus similitudes y su referencia al caso boliviano, los mismos que están contenidos en la parte final de este Capítulo.

Como anexo se consigna la relación de todas las normas jurídicas, con una breve explicación de su alcance.

I.1. PLANILLAS NACIONALES

BOLIVIA

MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.S. 25159, que crea el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. - D.S. 24581 de 1997, crea el Comité Interinstitucional de Protección y Defensa de la Propiedad Intelectual. 	<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio Constitutivo de la OMPI, adoptado por Ley 1438 de 1993. - ADPIC/OMC, adoptado por Ley 1637 de 1995. - Acuerdo de Complementación Económica, con los Estados Unidos de México (ACE – 31), Capítulo XVI. Artículos 16-01 al 16-43, relativo a Propiedad Intelectual, suscrito en el marco de la ALADI. - Acuerdo de Complementación Económica, con Cuba (ACE 47), Capítulo XI, Artículos 25 al 27, relativo a Propiedad Intelectual, suscrito en el marco de la ALADI. 	
<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley de Privilegios Industriales de 1916 - Ley Reglamentaria de Marcas de 1918 - Código de Comercio, Libro II, Título I, Capítulo III, Propiedad Industrial. - Código Penal, Delitos contra la Industria y el Comercio, Arts. 236 y 363. - D.S. 5470 de 1960, establece períodos de vigencia de las patentes y sus correspondientes anualidades 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial, adhesión mediante Ley 1482 de 1993 - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aprobado por Ley 2498 de 2003. - Arreglo de Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado por D.S. 20791 de 1985. 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial.

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<ul style="list-style-type: none"> - D.S. 9364 de 1970, establece restricciones a la patentabilidad de productos químicos y biológicos - D.S. 9673 de 1961, exceptúa la concesión de patentes industriales nuevas, para procedimientos y sistemas de elaboración de productos químicos, farmacéuticos y dietéticos. - D.S. 9530 de 1972, establece que todo trámite ante la oficina de Propiedad Industrial estará a cargo de abogado – apoderado. - D.S.24367 de 1996, modifica algunas normas relacionadas con la Propiedad Industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Arreglo de Estrasburgo, Clasificación Internacional de Patentes, ratificado por D.S. 20793. 	
<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley 1322 de Derecho de Autor de 1992 - D.S. 23907 de 1994, Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. - Código Penal. Art. 362 - D.S. 24582 de 1997, establece el Reglamento del Soporte Lógico o Software 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, adhesión por Ley 1439 de 1993. - Convenio de Roma, para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, adhesión por Ley 1476 de 1993. 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.S. 23069 de 1992, crea el Consejo Nacional de Semillas y Regula la Certificación y Fiscalización de Semillas. - Resolución 040/2001 del Ministerio de Agricultura, establece la competencia y procedimientos de certificación del Programa Nacional de Semillas. 	<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio UPOV, para la Protección de Obtenciones Vegetales, adhesión por Ley 1968 de 1999 	<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. -

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>E.- Recursos Genéticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.S. 24676 de 1997, que reglamenta la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 		<p>E.- Recursos Genéticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

COLOMBIA

MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política del Estado. Artículo 61, que establece el compromiso de la Propiedad Intelectual. 	<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de la OMPI, aprobado por Ley 46 de 1979. - ADPIC/OMC (Ley 170 de 1994) - TLC con México y Venezuela – G3 (Ley 172 de 1994) 	
<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política del Estado. Artículo 150 y 189. - Código de Comercio. Título II a la Propiedad Industrial. - Código Contencioso Administrativo de 1984 - Decreto 2591 de 2000, que reglamenta varios aspectos en la aplicación del régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. - Resolución 210 de 2001, de trámites y procedimientos de Propiedad Industrial. - Resolución 17585 de 2001, reglamenta procedimientos en materia de licencias obligatorias de patentes. - D. 2085 de 2002, reglamenta aspectos relacionados con la información suministrada para obtener registro sanitario respecto a nuevas entidades químicas en el área de medicamentos. 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial. Adhesión en 1936. - Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial (Ley 178 de 1994) - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), a partir de 2001. - Arreglo de Niza. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. - Arreglo de Locarno. Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. - Arreglo de Estrasburgo. Clasificación Internacional de Patentes. - Arreglo de Viena. Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas. 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial.

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley 23 de 1982, sobre Derechos de Autor. - Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la Ley 23 de 1982. - Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano, Artículos 270 a 272. - Ley 719 de 2001, modifica las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, sobre Derechos de Autor. - Decreto 1360 de 1989, reglamenta la descripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional de Derecho de Autor. - Decreto 2041 de 1991, crea la Dirección Nacional de Derecho de Autor. - Decreto 460 de 1995, reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor . - Decreto 162 de 1996, reglamenta la Decisión Andina 351 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos. - Decreto 1278 de 1996, fija la estructura interna de la Dirección Nacional del Derecho de Autor . - Decreto 1721 de 2002, reglamenta la Ley 719 de 2001, de Derecho de Autor. 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas, ratificado por Ley en 1987. - Convenio Universal sobre Derechos de Autor, ratificado por Ley en 1975. - Convenio de Roma, para la Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión, ratificado por Ley en 1975. - Convenio para la Protección de Fonogramas y contra la Reproducción no Autorizada, ratificado por Ley en 1992. - Tratado para el Registro de las Obras Audiovisuales, aprobado por Ley en 1992. - Convenio de la OMPI, sobre Derecho de Autor, aprobado por Ley de 2000. 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Res. N° 1893 de 1995, da apertura al Registro Nacional de Variedades Vegetales, estableciendo el procedimiento para la obtención del Certificado de Obtentor. 	<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio UPOV, para la Protección de Obtenciones Vegetales 	<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
		<p>E.- Recursos Genéticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.
<p>F.- Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto 1766 de junio de 1983 que crea el Premio Nacional al Inventor Colombiano. 		

ECUADOR

MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política del Estado, que dispone que se garantizará la Propiedad Intelectual. - Ley de Propiedad Intelectual, emitida en 1998. - Reglamento de Ley de Propiedad Intelectual., emitido en 1999. 	<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de la OMPI, aprobado por Resolución Nacional en 1987. - ADPIC/OMC, aprobado y publicado en Registro Oficial en 1996. 	
<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial, aprobado y publicado en Registro Oficial en 1999. - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), aprobado y publicado en Registro Oficial en 2001. - Arreglo de Niza, Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, artículo 215 de la Ley de Propiedad Intelectual. - Arreglo de Estrasburgo. Clasificación Internacional de Patentes, artículo 169 de la Ley de Propiedad Intelectual. - Arreglo de Locarno. Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales, artículo 169 de la Ley de Propiedad Intelectual. - Arreglo de Niza. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial.

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Berna, sobre Protección de las Obras Literarias y Artísticas. - Convenio de Roma, para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión - Convenio para la Protección de Fonogramas y contra la Reproducción no Autorizada - Convenio de la OMPI sobre Derecho de Autor (WTC) - Convenio de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT) 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Libro III de la Ley Propiedad Intelectual - Decreto N° 3708, de 1994, reglamentada la Decisión 345 sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 	<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio UPOV, para la Protección de las Obtenciones Vegetales 	<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
		<p>E.- Recursos Genéticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.
<p>F.- Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Derechos Colectivos: Título Final de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 377. 		

PERÚ

MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo N° 807, que establece una nueva reglamentación respecto a las facultades, normas y organización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). 	<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de la OMPI - ADPIC/OMC, incorporado en 1945. 	
<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley de Propiedad Industrial. Decreto Legislativo 823 de 1996. 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial, incorporado en 1994 - Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial, suscrita en 1929. - Arreglo de Niza. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. - Arreglo de Viena. Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas. - Arreglo de Estrasburgo. Clasificación Internacional de Patentes. - Arreglo de Locarno. Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial.

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley sobre Derechos de Autor. - Código Penal. - Resolución 0121 que formula lineamientos sobre el uso de software. 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de Berna, para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. - Convenio de Roma, sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión. - Convenio para la Protección de Fonogramas y contra la Reproducción no Autorizada - Convenio Satélites, sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite. - Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales. - Convenio de la OMPI, sobre Derechos de Autor.(WTC), incorporado por D.S. el 2001. - Convenio de la OMPI, sobre Interpretación, Ejecución y Fonogramas (WPPT), incorporado por D.S.s el 2002. 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.
<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - D.S. 008-96 – ITINCI, Reglamento de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales. 		<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
		<p>E.- Recursos Genéticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.
<p>F.- Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decreto Ley N° 27811, establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los recursos Biológicos 		

VENEZUELA

MARCO JURÍDICO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Artículos 85, 98, 101, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 124, 127, 129, 153, 156 (ordinales 15 y 32), 302, 305 y 307. - Decreto de 13 de noviembre de 1996, crea el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI) 	<p>A.- Propiedad Intelectual</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de la OMPI, aprobado en 1967 - ADPIC/OMC - Acuerdo de Complementación Económica con México y Colombia – G3 (ACE 33). Capítulo XVII. - Acuerdo de Complementación Económica suscrito con Cuba (ACE 40). Capítulo XIII. 	
<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio Bolivariano de 1911 “Acuerdo sobre Patentes y Privilegios de Invención. - Ley de Propiedad Industrial de 1955 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio de París, para la Protección de la Propiedad Industrial. 	<p>B.- Propiedad Industrial</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial.
<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley sobre Derechos de Autor de agosto de 1993 - Decreto 618 de 1993, reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - Ley sobre Mensajes de Datos y Firmas Digitales. - Ley sobre Delitos Informáticos. 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Convenio Universal de 1952 - Convenio para la Protección de Fonogramas y contra la Reproducción no Autorizada - Convenio de Berna, para Protección de las Obras Literarias y Artísticas. - Convenio de Roma, sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión. - Convenio Universal de 1971 	<p>C.- Derecho de Autor y Derechos Conexos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Legislación Nacional	Convenios Internacionales	Normas Andinas
<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley de Diversidad Biológica de 2000 - Reglamento de la Decisión 345, relativa al Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 		<p>D.- Variedades Vegetales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
		<p>E.- Recursos Genéticos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.
<p>F.- Otros</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ley sobre mensajes de datos y firmas digitales. - Ley sobre delitos informáticos 		

I.2. MATRIZ DE ANÁLISIS COMPARADO

LEGISLACIÓN BÁSICA EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LOS PAÍSES MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ANDINA

LEGISLACIÓN PAÍS	BOLIVIA	COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ	VENEZUELA
<p>PROPIEDAD INTELECTUAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio Constitutivo de la OMPI - ADPIC/OMC - D.S. 25159 que crea el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual. - Acuerdo de Complement. Económica con México. - Acuerdo de Complement. Económica con Cuba. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política del Estado, Artículo 61 - Convenio de la OMPI - ADPIC/OMC - Acuerdo de Complement. Económica con México y Venezuela, G3. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política del Estado - Ley de Propiedad Intelectual - Regto. de Ley de Propiedad Intelectual. - Convenio de la OMPI - ADPIC/OMC 	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto Legislativo N° 807, con nuevas competencias para INDECOPI. - Convenio OMPI - ADPIC/OMC 	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999 - Decreto de 13 de noviembre de 1996, que crea el SAPI. - Convenio OMPI - ADPIC/OMC - Acuerdo de Complement. Económica con México y Colombia, G3. - Acuerdo de Complement. Económica con Cuba.

LEGISLACIÓN PAÍS	BOLIVIA	COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ	VENEZUELA
PROPIEDAD INDUSTRIAL	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Privilegios Industriales de 1916. - Ley Reglamentaria de Marcas de 1918. - Código de Comercio - Código Penal - D.S. 5470 6/5/1960: períodos de vigencia de las patentes. - D.S. 9364 27/8/1970: restricciones a la patentabilidad de productos químicos y biológicos. - D.S. 9673 19/4/1961: disposiciones sobre patentes para productos químicos y farmacéuticos - D.S. 9530 12/2/1972: condiciones para trámites. - D.S. 20791 10/5/1985: adopción del Arreglo de Niza - D.S. 20793 10/5/1985: pone en vigencia el Arreglo de Estrasburgo. - D.S.24367 18/10/1996: ajustes a normas de Propiedad Industrial. - D.S. 24581 25/4/1997: crea el Comité Interinstitucional de Protección y Defensa de la Propiedad Intelectual. - Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial. Adhesión por Ley 1482 de 1993 - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Constitución Política del Estado, artículos 150 y 189 - Código de Comercio - Código Contencioso Administrativo - D. 2591 de 2000, reglamenta aspectos de aplicación del Régimen de Propiedad Industrial. - Res. 210 de 2001, de trámites y procedimientos de Propiedad Industrial. - Res. 17585 de 2001, reglamenta procedimientos en materia de licencias obligatorias de patentes. - D. 2085 de 2002, reglamenta aspectos relacionados con la información suministrada para obtener registro sanitario respecto a nuevas entidades químicas en el área de medicamentos. - Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial - Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) - Arreglo de Niza. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. - Arreglo de Estrasburgo. Clasificación Internacional de Patentes. - Arreglo de Locarno. Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. - Arreglo de Viena. Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas. - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual - Convenio de Paris para la Protección de la Propiedad Industrial - Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT) - Arreglo de Niza. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. - Arreglo de Estrasburgo. Clasificación Internacional de Patentes. - Arreglo de Locarno. Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Propiedad Industrial de 1996 - Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial - Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial - Arreglo de Niza. Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas. - Arreglo de Viena - Arreglo de Estrasburgo. Clasificación Internacional de Patentes. - Arreglo de Locarno. Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales. - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> - Convenio Bolivariano de 1911 “Acuerdo sobre Patentes y Privilegios de Invención”. - Ley de Propiedad Industrial de 1955. - Convenio de Paris, para la Protección de la Propiedad Industrial. - Decisión 486. Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial.

LEGISLACIÓN PAÍS	BOLIVIA	COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ	VENEZUELA
DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 1322 de Derecho de Autor - D.S. 23907 de 1994, Reglamento de la Ley de Derecho de Autor. - Código Penal - D.S. 24582 de 1997, Reglamento del Software. - Convenio de Berna, para la Protección de Obras Literarias y Artísticas. Adhesión por Ley 1439 de 1993. - Convenio de Roma, para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Adhesión por Ley 1476 de 1993 - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. - Tratados OMPI, WCT y WPPT * 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley 23 de 1982 sobre Derechos de Autor. - Ley 44 de 1993, modifica y adiciona la Ley 23 de 1982. - Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano, Arts. 270 a 272 - Ley 719 de 2001, modifica las Leyes 23 de 1942 y 44 de 1993, sobre Derechos de Autor. - D. 1360 de 1989, reglamenta disposiciones de soporte lógico. - D. 2041 de 1991, crea la Dirección Nacional de Derecho de Autor. - D. 460 de 1995, reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor. - D. 162 de 1996, reglamenta la Decisión 351 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos. - D. 1278 de 1996, fija la estructura de la Dirección Nacional del Derecho de Autor. - D. 1721 de 2002, reglamenta la Ley 719 de 2001, de Derecho de Autor - Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas - Convenio Universal sobre Derechos de Autor - Convenio Internacional para la Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, Producciones de Radiodifusión - Convenio para la Protección de Fonogramas y contra la Reproducción no Autorizada - Tratado para el Registro de las Obras Audiovisuales - Convenio de la OMPI - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual - Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas - Convenio de Roma, para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión - Tratado de la OMPI (WTC) - Tratado de la OMPI (WPPT) - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley sobre Derechos de Autor de 1999. - Código Penal - Resolución 0121 de lineamientos sobre Software. - Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas - Convenio de Roma, para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión - Convenio para la Protección de Fonogramas y contra la Reproducción no Autorizada - Convenio Satélites, sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite. - Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales. - Tratados OMPI (WCT y WPPT) - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Derechos de Autor de 1993 - Decreto 618 de 1993 reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - Convenio Universal 1952 - Convenio para la Protección de los Productos Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de Fonogramas - Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias y Artísticas - Convenio de Roma, para la Protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión - Convenio Universal 1971 - Decisión 351. Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

* Suscritos pero no ratificados

LEGISLACIÓN PAÍS	BOLIVIA	COLOMBIA	ECUADOR	PERÚ	VENEZUELA
OBTENTOR VEGETAL	<ul style="list-style-type: none"> - Ley N° 1968 de 199, adhesión a la UPOV. - D.S. 23069 de 1992, crea el Consejo Nacional de Semillas - Resolución 040/2001 del Ministerio de Agricultura - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Res. N° 1893 de 1995, Registro Nacional de Variedades Vegetales. - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Libro III de la Propiedad Intelectual - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. - D. 3708, reglamenta la Decisión 345. - Convenio UPOV, para la Protección de las Obtenciones Vegetales . 	<ul style="list-style-type: none"> - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. - D.S. 008-96-ITINCLI. Reglamento de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley de Diversidad Biológica de 2000. - Decisión 345. Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales. - Reglamento Decisión 345.
RECURSOS GENÉTICOS	<ul style="list-style-type: none"> - D.S. 24676 de 1997 que reglamenta la Decisión 391. 	<ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos. 	<ul style="list-style-type: none"> - Decisión 391. Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.
OTROS		<ul style="list-style-type: none"> - D. 1766 de junio de 1983 que crea el Premio Nacional al Inventor Colombiano. 	<ul style="list-style-type: none"> - Derechos Colectivos: Título Final de la Ley de Propiedad Intelectual, artículo 377 	<ul style="list-style-type: none"> - Decreto Ley N° 27811, establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los recursos Biológicos 	<ul style="list-style-type: none"> - Ley sobre mensajes de datos y firmas digitales. - Ley sobre delitos informáticos

I.3. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

La información procesada en las páginas precedentes nos permite formular los siguientes criterios básicos de análisis y algunos comentarios:

1. Todos los países miembros de la Comunidad Andina tienen, en mayor o menor grado, un desarrollo legislativo que da cobertura a los distintos regímenes de la Propiedad Intelectual. Un avance digno de ser resaltado es el que registran Colombia, Ecuador y Venezuela, países que han consagrado a nivel constitucional preceptos específicos sobre la protección de los derechos de la Propiedad Intelectual.
2. Es notoria la presencia de las normas internacionales en las actuales regulaciones nacionales de los países andinos, lo que ratifica la vocación internacional de esta materia. Todos los países miembros han suscrito o adherido a los principales convenios internacionales en el marco de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y, posteriormente, al régimen del ADPIC adoptado en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
3. Las normas y tratados internacionales son de diferente data, los hay bastante antiguos como el Convenio de la Unión de París -al cual han adherido la mayor parte de los países andinos recién en las décadas finales del Siglo XX- y los hay relativamente recientes, como el ADPIC y los Tratados Internet de la OMPI.
4. Las legislaciones nacionales, en general, son relativamente recientes. Los únicos casos de legislaciones con una antigüedad importante son el de Bolivia, que mantiene aún vigentes sus primeras leyes de Propiedad Industrial (Patentes 1916 y Marcas 1918) y el de Venezuela, cuya Ley de Propiedad Industrial data de 1955.
5. Existen desarrollos legislativos muy actualizados, como los de Perú y Ecuador, países cuyas Leyes de Propiedad Intelectual constituyen un régimen que integra las distintas áreas de la Propiedad Intelectual, en consonancia con los avances de la OMPI y el ADPIC/OMC.

Los otros países, mantienen su legislación todavía segregada, tratando en forma separada, por una parte, la Propiedad Industrial y, por otra, el Derecho de Autor. En algunos casos, como el de Bolivia, se llega incluso a un nivel de dispersión normativa.

6. En general, la aplicación de los convenios internacionales implica una mayor actualización de los regímenes sustantivos de la Propiedad Intelectual y una mayor estabilidad normativa. En algunos casos, constituyen legislación paralela a la legislación nacional, creando situaciones de dualidad o sobre posición normativa. Sin embargo, en los sistemas jurídicos andinos predomina la

aplicación de la norma internacional, dejando su operatividad al ordenamiento nacional.

7. Mención especial en este orden, merece el caso de los regímenes comunes establecidos en el marco del proceso andino de integración, como las Decisiones 486, 351, 345 y 391, que se aplican en todos los países miembros como legislación nacional, por su naturaleza supranacional, hecho que implica la aplicación obligatoria y directa de estas normas, en primacía sobre la norma nacional en caso de conflicto.

Si bien todos los países andinos aplican y reputan estas normas andinas sobre Propiedad Intelectual como legislación propia, no todos han reglamentado su aplicación, presentando casos de dualidad normativa o falta de marcos operativos de los regímenes andinos dentro de las estructuras institucionales y administrativas del país. El caso más evidente de esta situación es el de Bolivia, especialmente en materia de protección de los derechos de Propiedad Intelectual, materia en la cual las normas andinas contemplan competencias y mecanismos más desarrollados desde el punto de vista institucional y administrativo.

8. En general, es evidente la tendencia hacia un proceso de armonización multilateral de los temas de la Propiedad Intelectual, proceso en el cual se hallan inscritos los países andinos, todos ellos adheridos al ADPIC/OMC, y teniendo como norma común la andina. También, dentro de esta tendencia se han adoptado y uniformado los sistemas de clasificación internacional de marcas (Niza), patentes (Estrasburgo) y diseños y dibujos industriales (Locarno).
9. Sintetizando, se puede señalar que en los países andinos existe suficiencia de legislación básica que permita el ejercicio de una adecuada administración de los regímenes de Propiedad Intelectual, fundamentalmente, en los aspectos sustantivos de la legislación. Están menos desarrollados los aspectos adjetivos u operacionales, particularmente respecto a los regímenes internacionales.

CAPITULO II

PROTECCIÓN DE DERECHOS

II. PROTECCIÓN DE DERECHOS

Como se ha podido constatar, los países andinos tienen marcos legislativos adecuados para resguardar los derechos de la propiedad intelectual. Sin embargo, la aplicación de las normas o la observancia de los preceptos contenidos en ellas, enfrenta complejas dificultades, muchas de las cuales son el resultado de los problemas estructurales que caracterizan a los países en desarrollo. Otras, tienen estrecha relación con el nivel de comprensión y concientización de las sociedades respecto a este tipo de derechos.

En este escenario, cada Estado andino ha generado los instrumentos con los cuales pretende hacer efectivo el respecto a las normas y derechos de la Propiedad Intelectual. La comparación de las vías, mecanismos y acciones que se verifican en cada uno de ellos con tales fines, es objeto de examen en el presente capítulo.

Para ello, bajo una estructura de análisis común, se describen la competencia y acciones que cumplen las autoridades nacionales de cada país, en torno a los siguientes aspectos:

- Tutela judicial
- Tutela administrativa
- Medidas cautelares
- Medidas de frontera

II.1. SISTEMAS NACIONALES

BOLIVIA

1. TUTELA JUDICIAL

Las infracciones o violaciones a los derechos de Propiedad Intelectual están identificadas en el Código Penal como delitos. En consecuencia, la principal vía de represión de este tipo de actos se encausa ante los jueces en materia penal, estando el procedimiento de acusación bajo la responsabilidad del Ministerio Público o mediante querrela de los titulares afectados.

Al presente, se ha suscrito un convenio de cooperación interinstitucional entre el SENAPI y la Fiscalía de Distrito de la ciudad de La Paz, con el propósito de contar con un Fiscal de Materia en temas de Propiedad Intelectual.

En cuanto al resarcimiento de daños y perjuicios ocasionados en un acto de infracción a un derecho de Propiedad Intelectual, la responsabilidad civil puede emerger de la misma acción penal como también de una demanda de daños y perjuicios ante un juez en materia civil.

2. TUTELA ADMINISTRATIVA

La protección de derechos de Propiedad Intelectual por la vía administrativa tiene un precario desarrollo, puesto que el SENAPI como autoridad competente no ejercita su potestad de vigilancia e intervención directa para prevenir o reprimir los actos de infracción o violación a estos derechos.

Hasta el presente las acciones administrativas han estado orientadas a la suscripción de convenios con autoridades de otras áreas de administración (Cortes de Justicia, Ministerio Público, Aduana, Policía e Impuestos Internos) con el propósito de coordinar esfuerzos y acciones en la prevención de este tipo de ilícitos.

En el mismo sentido se han constituido comisiones, tanto a nivel nacional como regional, para la protección y defensa de los derechos de Propiedad Intelectual, las cuales se hallan integradas por diversas instituciones tanto del sector público como del privado, pero que en la práctica no han podido lograr resultados eficaces.

La competencia administrativa sí se manifiesta en materia de oposiciones, cuyo conocimiento y resolución está a cargo del Órgano Administrativo, pudiendo eventualmente interponerse, una vez agotada la vía administrativa, un proceso contencioso administrativo ante la Corte Suprema de Justicia.

De igual forma, se halla en el ámbito administrativo la posibilidad de solución de controversias en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, a través de procedimientos de conciliación.

3. MEDIDAS CAUTELARES

Los jueces pueden ordenar el retiro de los canales comerciales de aquellas mercancías que violen derechos de Propiedad Intelectual, así como la distribución de las mismas, ello bien como medida provisional decretada por un tribunal o como sanción en una sentencia condenatoria.

La autoridad judicial competente puede ordenar como medidas cautelares el cese inmediato de la actividad ilícita; la incautación, el embargo, decomiso o secuestro preventivo, según corresponda de los ejemplares producidos con infracción; la incautación, embargo, decomiso o secuestro de los aparatos o medio para la comisión ilícita (Artículo 56 de la Decisión 351).

Pueden ordenarse como medidas preventivas el cese inmediato de los actos que constituyan la presunta infracción; el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la presunta infracción; la suspensión de la importación o de la exportación de los productos; la constitución por el presunto infractor de una garantía suficiente; y, el cierre temporal del establecimiento del demandado o denunciado, cuando fuese necesario para evitar la continuación o repetición de la presunta infracción (Artículo 246 de la Decisión 486)

El Artículo 255 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial.

4. MEDIDAS DE FRONTERA

Cualquier autoridad judicial competente dentro de la jurisdicción nacional, puede recibir pedidos de particulares para ordenar a las autoridades aduaneras que se suspende el despacho de productos que infrinjan derechos de Propiedad Intelectual.

El Artículo 250 de la Decisión 486 faculta al titular de un registro de marca que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que infrinjan ese registro, solicitar a la autoridad competente suspender esa operación aduanera.

Determinar la infracción, los productos con marcas falsificadas incautados por la autoridad competente no podrán ser reexportados ni sometidos a un procedimiento aduanero diferente, salvo que cuenten con la autorización expresa del titular de la marca.

El Artículo 255 de la Decisión 486 establece que la autoridad nacional competente podrá ordenar la destrucción o decomiso de las mercancías infractoras, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan al titular del derecho y a reserva del derecho del demandado a apelar ante una autoridad judicial.

El SENAPI a propuesto a la Aduana de Bolivia, la firma de un convenio de cooperación interinstitucional para aplicar de manera más eficiente las medidas de frontera, al amparo de los preceptos legales de Propiedad Intelectual, así como de la misma Ley de Aduanas que faculta ajustarse a las disposiciones generales y a los principios básicos establecidos en el Acuerdo ADPIC.

COLOMBIA

1. TUTELA JUDICIAL

Los Tribunales ordinarios tienen competencia en casos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual mediante los jueces civiles de circuito especializados, de conformidad con el Artículo 17 del Código de Procedimiento Civil que establece su competencia para conocer en primera instancia los procesos relativos a “ patentes, dibujos y modelos industriales, marcas, enseñas y nombres comerciales y los demás relativos a la Propiedad Industrial”, que no se encuentren atribuidos a las autoridades administrativas o la jurisdicción contencioso administrativa. Los mismos jueces conocen los recursos de reposición interpuestos contra las sentencias que dictan y de los recursos de apelación contra las mismas conocen los Tribunales superiores de Distrito Judicial.

En igual forma, los jueces civiles de circuito son competentes para decidir los asuntos relacionados con competencia desleal de conformidad con lo previsto por la Ley 256 de 1996 y la Ley 446 de 1998, cuando se inicien las respectivas acciones ante los mismos.

En cuanto a la responsabilidad civil, el titular o licenciataria de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, nombre o enseña comercial, puede intentar la acción de indemnización por los perjuicios causados por la usurpación, sin necesidad de solicitar medidas cautelares o cuando estas hubieren sido negadas. Las costas correspondientes a los gastos del proceso deben ser impuestas de oficio por el juez a la parte vencida.

Por otra parte, en casos de infracción penal de los derechos de Propiedad Intelectual el Código de Procedimiento Penal dispone que corresponde a la Fiscalía General de la Nación dirigir, realizar y coordinar las investigaciones en materia penal. En la etapa de juzgamiento la competencia en primera instancia la tienen los jueces de circuito, los Tribunales Superiores de Distrito en segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia cuando se trate del recurso de casación.

El Código Penal establece diversas conductas constitutivas de delitos por violación de derechos de Propiedad Intelectual, sancionándolos con penas de prisión y multa.

Todos los titulares de derechos de Propiedad Intelectual que se vean vulnerados mediante la comisión de conductas tipificadas como delitos, se encuentran legitimados para entablar los procedimientos penales correspondientes, procediendo también la investigación de oficio.

2. TUTELA ADMINISTRATIVA

El trámite administrativo de obtención y registro de derechos de Propiedad Intelectual, se cumple en el caso de Propiedad Industrial ante la Superintendencia de Industria y Comercio y en caso del Derecho de Autor ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, organismos que deben emitir un pronunciamiento sobre la solicitud, otorgándola o denegándola, pudiendo interponerse contra esta decisión los recursos de reposición y/o apelación. Adicionalmente puede solicitarse la revocatoria directa de actos administrativos de conformidad con el Código Contencioso Administrativo.

Los solicitantes y titulares de derechos de Propiedad Intelectual pueden oponerse a la concesión de derechos a favor de terceros, acudiendo directamente ante la autoridad administrativa competente.

Una vez terminada la etapa administrativa o vía gubernativa, se puede acudir ante la jurisdicción contencioso administrativa (Consejo de Estado), con el fin de obtener un pronunciamiento mediante el cual se revoque la decisión de la Administración. El Consejo de Estado realiza el control de legalidad de los actos administrativos y en esta medida puede mantenerlos o declarar su nulidad total o parcial. En estos eventos, se puede ordenar a la autoridad administrativa que actúe de una determinada manera, por ejemplo cancelando un registro de marca, certificado de patente o registro de autor, o volviendo a efectuar un estudio de registrabilidad o patentabilidad.

Los actos constitutivos de competencia desleal de conformidad con la Ley 256 de 1996, pueden ser reprimidos mediante las acciones correspondientes que pueden ser iniciadas ante los jueces competentes o ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las acciones de competencia desleal pueden ser declarativa y de condena, cuando se solicita que se declare la ilegalidad de los actos realizados y como consecuencia de ello se ordene al infractor remover los efectos producidos por los mismos e indemnizar los perjuicios causados; y preventiva o de prohibición, cuando se solicita al juez que evite la realización de un acto de competencia desleal que aún no se haya perfeccionado o que lo prohíba aunque no se haya producido daño alguno.

Las resoluciones que profiera en casos de competencia desleal la Superintendencia de Industria y Comercio no tienen control judicial por regla general, salvo que se incurra en vías de hecho caso en el cual cabe la acción de tutela contra sus decisiones.

En el mismo sentido, en virtud de los Artículos 607 y 609 del Código de Comercio, el perjudicado por el uso de una marca, lema, nombre o enseña comercial, puede acudir ante los jueces civiles de circuito para impedir tal uso y reclamar la correspondiente indemnización de perjuicios.

3. MEDIDAS CAUTELARES

De conformidad con los Artículos 568, 581 y 597 del Código de Comercio, el titular o licenciataria de una patente, modelo de utilidad, diseño industrial, marca, lema, denominación de origen, nombre o enseña comercial, puede solicitar a los jueces competentes que tomen las medidas cautelares necesarias para proteger sus derechos, siempre que éstos sean objeto de usurpación o desconocimiento.

Estas medidas cautelares, pueden consistir en obligar al usurpador a prestar caución como garantía de que se abstendrá de realizar los actos por los cuales fue denunciado, el comiso de los artículos fabricados con violación del derecho y la prohibición de hacerles propaganda, el secuestro de la maquinaria o elementos que sirvan para fabricar los artículos con que se infringe el derecho, o cualquier otra medida equivalente

Dentro de las medidas cautelares previstas por el Código de Procedimiento Civil se encuentran, también, el embargo y secuestro de bienes sometidos o no a registro y la inscripción de la demanda, entre otras.

Las medidas cautelares pueden ordenarse por los jueces competentes o por la Superintendencia de Industria y Comercio solamente a petición de parte, en los siguientes procesos:

Las medidas cautelares pueden solicitarse y ser ordenadas en los siguientes procesos:

- En desarrollo del proceso de medidas cautelares de que trata el artículo 568 del Código de Comercio, el titular de un derecho de Propiedad Industrial puede solicitar al juez que tome las medidas cautelares pertinentes para evitar que sus derechos sean infringidos. Para el efecto, debe acreditarse de manera sumaria la existencia de la usurpación y prestarse caución para garantizar la indemnización de perjuicios que puedan sufrir el presunto infractor o terceros;
- Con la presentación de la denuncia por competencia desleal de que trata la ley 256 de 1996 o previa a la misma, el titular de los derechos de Propiedad Industrial pueden solicitar al juez competente o a la Superintendencia de Industria y Comercio, la orden de medidas cautelares de tramitación preferente (pueden ser dictadas dentro de las 24 horas siguientes a la presentación de la solicitud) en caso de peligro grave e inminente;
- Sin perjuicio de las anteriores medidas cautelares de tramitación preferente, también pueden ser solicitadas medidas cautelares de tramitación normal, tendientes a ordenar la cesación provisional del acto de competencia desleal, entre otras; y

- Durante los procesos relacionados con derechos de Propiedad Industrial instaurados ante los jueces competentes y cuyo objeto no gira en torno a la comisión de actos de competencia desleal, el demandante puede solicitar la orden de medidas cautelares tendientes a prevenir un daño o evitar que este se continúe dando.

4. MEDIDAS DE FRONTERA

El Decreto 2685 de 1999 (Estatuto Aduanero), contempla la aprehensión y decomiso de mercancías en eventos de importación y tránsito, en los cuales la mercancía no corresponda o exceda en cantidad a lo consignado en los documentos pertinentes, haya entrado o salido ilegalmente del país, o intente ser ocultada, entre otros. En consecuencia, este tipo de medidas no se encuentra previsto de manera expresa para los eventos de infracción de derechos de Propiedad Intelectual.

Sin embargo, la mencionada Ley prevé que si durante el desarrollo del reconocimiento y avalúo de la mercancía, la autoridad aduanera deberá informar a la autoridad competente sobre cualquier delito que pudiera haber detectado, debiendo esta última iniciar de oficio la investigación

ECUADOR

En el Ecuador, según la Ley de Propiedad Intelectual, la violación de cualquiera de los derechos sobre la propiedad intelectual da lugar al ejercicio de acciones civiles y administrativas, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar, si el hecho estuviese tipificado como delito.

1. TUTELA JUDICIAL

Acciones Civiles

Son competentes para el conocimiento de las controversias sobre materia de Propiedad Intelectual, en primera instancia, los Jueces Distritales de Propiedad Intelectual y, en segunda instancia, los Tribunales Distritales de Propiedad Intelectual. Los recursos de casación que se dedujeren en ésta materia serán conocidos por la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de la Corte Suprema de Justicia.

La competencia en materia de propiedad intelectual se fija de conformidad con las reglas establecidas en el Código de Procedimiento Civil.

Son también competentes para conocer éstas causas los jueces del lugar en el que se hubiere cometido la infracción.

Las demandas relacionadas con la propiedad intelectual se tramitan en juicio verbal sumario

La indemnización de daños y perjuicios comprenderá las pérdidas sufridas y el lucro cesante, causadas por la infracción. La cuantía de los ingresos no obtenidos, se fijará teniendo en cuenta entre otros, los siguientes criterios:

- a) Los beneficios que el titular hubiese obtenido de no haberse producido la violación;
- b) Los beneficios obtenidos por el infractor como consecuencia de la violación;
- c) El precio, remuneración o regalía que el infractor hubiese tenido que pagar al titular, para la explotación lícita de los derechos violados; y,
- d) Los gastos razonables, inclusive honorarios profesionales, incurridos por el titular con relación a la controversia.

Las sentencias condenatorias de las acciones civiles por violación de los derechos de propiedad intelectual, impondrán al infractor adicionalmente una multa de tres a cinco veces el valor total de los ejemplares de obras, interpretaciones, producciones o emisiones de radiodifusión, o de las regalías que de otro modo hubiere percibido el titular de los derechos por explotación legítima de éstas u otras prestaciones de propiedad intelectual.

Las multas que se recaudan se destinan en un tercio al IEPI; en un tercio al titular del derecho infringido y el tercio restante se distribuye de la siguiente manera:

1. Presupuesto de la Función Judicial;
2. Fondo de Solidaridad; y,
3. Fomento de Ciencia y Tecnología a través del IEPI.

Acción Penal

En materia penal es reprimido con prisión, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quien en violación de los derechos de propiedad intelectual, almacene, fabrique, utilice con fines comerciales, oferte en venta, venda, importe o exporte:

- a) Un producto amparado por una patente de invención o modelo de utilidad obtenido en el país;
- b) Un producto fabricado mediante la utilización de un procedimiento amparado por una patente de invención obtenida en el país;
- c) Un producto amparado por un dibujo o modelo industrial registrado en el país;
- d) Una obtención vegetal registrada en el país, así como su material de reproducción, propagación o multiplicación;
- e) Un esquema de trazado (topografía) registrado en el país, un circuito semiconductor que incorpore dicho esquema de trazado (topografía) o un artículo que incorpore tal circuito semiconductor;
- f) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca notoria o de alto renombre, registrada en el país o en el exterior;
- g) Un producto o servicio que utilice una marca no registrada idéntica o similar a una marca registrada en el país; y,
- h) Un producto o servicio que utilice una marca o indicación geográfica no registradas, idéntica o similar a una indicación geográfica registrada en el país.

En los casos de los literales g) y h) los productos o servicios que utilicen el signo no registrado, deberán ser idénticos o similares a los productos o servicios protegidos por las marcas o indicaciones geográficas registradas en el país.

- Serán reprimidos con igual pena, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:
 1. Divulguen, adquieran o utilicen secretos comerciales, secretos industriales o información confidencial;
 2. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas no registradas en el país, que constituyan una imitación de signos distintivos notorios o de alto renombre, registrados en el país o en el exterior que pueden razonablemente confundirse con el original; y,

3. En productos o servicios o transacciones comerciales utilicen marcas o indicaciones geográficas que constituyan una imitación de signos distintos registrados en el país, que pueden razonablemente confundirse con el original, para distinguir productos o servicios que puedan suplantar a los protegidos.
- Serán reprimidos con prisión, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen nombres comerciales sobre los cuales no han adquirido derechos, que sean idénticos a nombres comerciales pública y notoriamente conocidos en el país o marcas registradas en el país, o a marcas notorias o de alto renombre registradas en el país o en el exterior.

También se reprime con la pena de prisión, a quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual utilicen apariencias distintivas, idénticas o similares a apariencias distintivas pública y notoriamente conocidas en el país.

- Serán reprimidos con prisión, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de propiedad intelectual:
 - a) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas de alto renombre o notorias, registradas en el país o en el exterior;
 - b) Fabriquen, comercialicen o almacenen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas o denominaciones de origen registradas en el país; y,
 - c) Separen, arranquen, reemplacen o utilicen etiquetas, sellos o envases que contengan marcas legítimas, para utilizarlos en productos de distinto origen.

Con igual sanción serán reprimidos quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten artículos que contengan indicaciones falsas acerca de la naturaleza, procedencia, modo de fabricación, calidad, características o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; o, contengan informaciones falsas acerca de premios u otras distinciones.

- Serán reprimidos con prisión y multa, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes almacenen, fabriquen, utilicen con fines comerciales, oferten en venta, vendan, importen o exporten productos falsificados identificados con marcas de alto renombre o notoriamente conocidas, registradas en el país o en el exterior, o con marcas registradas en el país.

También se reprimirá con la pena señalada quienes rellenen con productos espurios envases identificados con marca ajena.

- Serán reprimidos con prisión, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos:
 - a) Alteren o mutilen una obra, inclusive a través de la remoción o alteración de información electrónica sobre el régimen de derechos aplicables;
 - b) Inscriban, publiquen, distribuyan, comuniquen o reproduzcan, total o parcialmente, una obra ajena como si fuera propia;
 - c) Reproduzcan una obra;
 - d) Comuniquen públicamente obras, videogramas o fonogramas, total o parcialmente;
 - e) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones ilícitas de obras;
 - f) Reproduzcan un fonograma o videograma y en general cualquier obra protegida, así como las actuaciones de intérpretes o ejecutantes, total o parcialmente, imitando o no las características externas del original, así como quienes introduzcan al país, almacenen, distribuyan, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros tales reproducciones ilícitas; y,
 - g) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras, fonogramas o videogramas en las cuales se ha alterado o removido información sobre el régimen de derechos aplicables.

- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa, tomando en consideración el valor de los perjuicios ocasionados, quienes en violación de los derechos de autor o derechos conexos:
 - a) Reproduzcan un número mayor de ejemplares de una obra que el autorizado por el titular;
 - b) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros reproducciones de obras en número que exceda del autorizado por el titular;
 - c) Retransmitan por cualquier medio las emisiones de los organismos de radiodifusión; y,
 - d) Introduzcan al país, almacenen, ofrezcan en venta, vendan, arrienden o de cualquier otra manera pongan en circulación o a disposición de terceros aparatos u otros medios destinados a descifrar o decodificar las señales codificadas o de cualquier otra manera burlar o quebrantar los medios técnicos de protección aplicados por el titular del derecho.

- Serán reprimidos con prisión de un mes a dos años y multa, quienes ilícitamente obstaculicen, incumplan o impidan la ejecución de una providencia preventiva o cautelar.

Son circunstancias agravantes, además de las previstas en el Código Penal, las siguientes:

- a) El haber recibido el infractor apercibimiento sobre la violación del derecho;
- b) El que los productos materia de la infracción puedan provocar daños a la salud; y,
- c) El que las infracciones se cometan respecto de obras inéditas.

En todos los casos comprendidos como delitos, se dispondrá el comiso de todos los objetos que hubieren servido directa o indirectamente para la comisión del delito, cuyo secuestro podrá ser ordenado por el juez penal en cualquier momento durante el sumario y obligatoriamente en el auto de apertura del plenario.

2. TUTELA ADMINISTRATIVA

- La observancia y el cumplimiento de los derechos de Propiedad Intelectual son de interés público. El Estado, a través del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, IEPI, ejercerá la tutela administrativa de los derechos sobre la propiedad intelectual y velará por su cumplimiento y observancia.

El IEPI a través de sus Direcciones Nacionales ejercerá, de oficio o a petición de parte, funciones de inspección, vigilancia y sanción para evitar y reprimir violaciones a los derechos sobre la Propiedad Intelectual.

- Cualquier persona afectada por la violación o posible violación de los derechos de Propiedad Intelectual, podrá requerir al IEPI la adopción de las siguientes medidas:
 - a) Inspección;
 - b) Requerimiento de información; y,
 - c) Sanción de la violación de los derechos de propiedad intelectual.

Las inspecciones se realizarán por parte de los Directores Nacionales o sus delegados, en la forma que determine el Reglamento. Al momento de la inspección y, como requisito para practicarla válidamente, se entregará copia del acto administrativo en el que se la hubiere ordenado y, si fuese aplicable, la solicitud de la parte afectada.

Las peticiones que se presenten para obtener medidas cautelares permanecerán en reserva hasta luego de ejecutadas y, aún con posterioridad deberán adoptarse por las autoridades las medidas necesarias para preservar la confidencialidad de

la información no divulgada que haya debido suministrarse en el curso del procedimiento.

Si durante la diligencia se comprobare, aún presuntivamente, (prima facie) la violación de un derecho de propiedad intelectual o hechos que reflejen inequívocamente la posibilidad inminente de tal violación, se procederá a la formación de un inventario detallado de los bienes, de cualquier clase que estos sean, que se relacionen con tal violación. Se dejará constancia de lo examinado por los medios que de mejor manera permitan apreciar el estado de las cosas inspeccionadas.

Esta medida podrá incluir la remoción inmediata de rótulos que claramente violen derechos de propiedad intelectual, sin perjuicio de la aprehensión y depósito de las mercancías u otros objetos que violen derechos sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad intelectual.

- El IEPI, a través de las Direcciones Regionales competentes en razón de la materia, podrá adoptar cualquier medida cautelar de protección urgente de los derechos a que se refiere ésta Ley, si se acompañan a la pretensión cautelar las pruebas a que se refiere el artículo 306. Estas medidas tendrán carácter provisional, y estarán sujetas a revocación o confirmación.
- Cuando se presuma la violación de derechos de propiedad intelectual, el IEPI podrá requerir que se le proporcione cualquier información que permita establecer la existencia o no de tal violación. Dicha información deberá ser entregada en un término no mayor de quince días, desde la fecha de la notificación.

Salvo el caso de medidas cautelares provisionales, previo a la adopción de cualquier resolución, se escuchará a la parte contra la cual se inició el procedimiento. Si se estimare conveniente, podrá convocarse a una audiencia en la que los interesados podrán expresar sus posiciones.

- Concluido el proceso investigativo, el IEPI dictará resolución motivada. Si se determinare que existió violación de los derechos de propiedad intelectual, se sancionará al infractor con una multa de entre veinte y setecientas unidades de valor constante (UVC) y, podrá disponerse la adopción de cualquiera de las medidas cautelares previstas en esta Ley o confirmarse las que se hubieren expedido con carácter provisional.

Si existiere la presunción de haberse cometido un delito, se enviará copia del proceso administrativo al Juez Penal competente y al Ministerio Público.

- El IEPI impondrá sanción a quienes obstaculizaren o dificultaren el cumplimiento de los actos, medidas o inspecciones dispuestos por el IEPI, o no enviaren la información solicitada dentro del término concedido.

Anunciada o de cualquier modo conocida la comunicación publicada de una obra legalmente protegida sin que se hubiere obtenido la autorización correspondiente, el titular de los derechos podrá solicitar a la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos que se la prohíba, lo cual será ordenado inmediatamente. Al efecto se presume que el organizador, empresario o usuario no cuenta con la debida autorización por la sola protesta de parte del titular de los derechos.

La fuerza pública y en especial la Policía Judicial están obligadas a prestar a los funcionarios del IEPI el auxilio que éstos soliciten para el cumplimiento de sus funciones.

- La tutela administrativa de los derechos de propiedad intelectual se regirá por lo previsto en el Libro V de la Ley de Propiedad Intelectual.

En caso de infracción de los derechos reconocidos en la Ley, se podrá demandar:

- a) La cesación de los actos violatorios;
- b) El comiso definitivo de los productos u otros objetos resultantes de la infracción, el retiro definitivo de los canales comerciales de las mercancías que constituyan infracción, así como su destrucción;
- c) El comiso definitivo de los aparatos y medios empleados para el cometimiento de la infracción;
- d) El comiso definitivo de los aparatos y medios para almacenar las copias;
- e) La indemnización de daños y perjuicios;
- f) La reparación en cualquier otra forma, de los efectos generados por la violación del derecho; y,
- g) El valor total de las costas procesales.

Podrán exigirse también los derechos establecidos en los convenios internacionales vigentes en el Ecuador, especialmente los determinados en el Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio.

- Ninguna autoridad, ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o de cualquier otra prestación protegida por esta Ley, o prestar apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa y previa del titular del derecho o de su representante. En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.

Si la violación de los derechos se realiza a través de redes de comunicación digital, tendrá responsabilidad solidaria el operador o cualquier otra persona natural o jurídica que tenga el control de un sistema informático interconectado a dicha red, a través del cual se permita, induzca o facilite la comunicación,

reproducción, transmisión o cualquier otro acto violatorio de los derechos previstos en ésta Ley, siempre que tenga conocimiento o haya sido advertido de la posible infracción, o no haya podido ignorarla sin negligencia grave de su parte.

- El titular de un derecho sobre marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales que constatare que la Superintendencia de Compañías o de Bancos, hubiere aprobado la adopción por parte de las sociedades bajo su control de una denominación que incluya signos idénticos a dichas marcas, nombres comerciales u obtenciones vegetales, podrá solicitar al IEPI a través de los recursos correspondientes la suspensión del uso de la referida denominación o razón social para eliminar todo riesgo de confusión o utilización indebida del signo protegido.

3. MEDIDAS CAUTELARES

- Las providencias preventivas y cautelares relacionadas con la Propiedad Intelectual, se tramitan en conformidad con el Código de Procedimiento Civil.

El juez ordenará la medida al avocar conocimiento de la demanda, siempre que se acompañen pruebas sobre indicios precisos y concordantes que permitan razonablemente presumir la violación actual o inminente de los derechos sobre la propiedad intelectual o sobre información que conduzca al temor razonable y fundado sobre su violación actual o inminente, atenta la naturaleza preventiva o cautelar de la medida y la infracción de que pueda tratarse.

El juez exigirá al actor, atentas las circunstancias, que presente fianza o garantía suficiente para proteger al demandado y evitar abusos.

- A fin de evitar que se produzca o continúe la infracción a cualquiera de los derechos reconocidos en la presente Ley, evitar que las mercancías ingresen en los circuitos comerciales, inclusive las mercancías importadas, o bien para preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta infracción, los jueces están facultados a ordenar; a petición de parte, las medidas cautelares o preliminares que, según las circunstancias, fueren necesarias para la protección urgente de tales derechos y, en especial:
 - a) El cese inmediato de la actividad ilícita;
 - b) La suspensión de la actividad de utilización, explotación, venta, oferta en venta, importación o exportación, reproducción, comunicación, distribución, según proceda; y,
 - c) Cualquier otra que evite la continuación de la violación de los derechos.
- El secuestro podrá ordenarse sobre los ingresos obtenidos por la actividad infractora, sobre bienes que aseguren el pago de la indemnización, sobre los productos o mercancías que violen un derecho de propiedad intelectual, así

como sobre los equipos, aparatos y medios utilizados para cometer la infracción y sobre los ejemplares originales que hayan servido para la reproducción o comunicación.

La retención se ordenará sobre los valores debidos por concepto de explotación o remuneración.

- La prohibición de ausentarse del país se ordenará si el demandado no tuviere domicilio o establecimiento permanente en el Ecuador.
- El cese inmediato de la actividad ilícita podrá comprender:
 - a) La suspensión de la actividad infractora o la prohibición al infractor de reanudarla, o ambas;
 - b) La clausura provisional del local o establecimiento, la que se expedirá necesariamente cuando las mercancías infractoras o ejemplares ilícitos constituyan parte sustancial del comercio habitual del infractor;
 - c) El retiro del comercio de las mercancías, ejemplares ilícitos u objetos infractores y, su depósito judicial;
 - d) La inutilización de los bienes u objetos materia de la infracción y, en caso necesario, la destrucción de moldes, planchas, matrices, instrumentos, negativos, plantas o partes de aquellas y demás elementos destinados al empleo de invenciones patentadas, a la impresión de marcas, a la reproducción o comunicación no autorizada, o de aquellos cuyo uso predominante sea facilitar la supresión o neutralización de cualquier medio de protección técnica o de información electrónica y que sirvan predominantemente para actos violatorios de cualquier derecho de propiedad intelectual; y,
 - e) Cualquier otra medida que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos sobre la propiedad intelectual, atenta la naturaleza y circunstancias de la infracción.
- Las medidas serán ejecutadas en presencia del juez, si el actor así lo requiere, quien podrá asesorarse de los peritos necesarios o de funcionarios del IEPI, cuyo dictamen en la propia diligencia constará del acta correspondiente y servirá para la ejecución. La orden que expida el juez implicará, sin necesidad de formalidad ulterior o providencia adicional, la posibilidad de adopción de cualquier medida práctica necesaria para la plena ejecución de la medida cautelar, incluyendo el descerrajamiento de seguridades, sin perjuicio de la facultad del juez de que al momento de la diligencia ordene cualquier otra medida cautelar que resulte necesaria para la protección urgente de los derechos, sea de oficio o a petición verbal de parte.
- Las demandas que se presenten a fin de obtener una medida cautelar, así como las providencias correspondientes, tendrán la categoría de reservadas y no se notificarán a la parte demandada si no hasta después de su ejecución.

Si el actor indicare que para la prueba de la violación de los derechos se requiere de inspección judicial previa, el juez la dispondrá sin notificar a la parte contraria y podrá ordenar durante la diligencia las medidas cautelares pertinentes. Para este fin concurrirá con los funcionarios que deban cumplir tales medidas.

- En caso de obras fijadas electrónicamente en dispositivos de información digital o por procedimientos análogos, o cuya aprehensión sea difícil o pueda causar graves daños al demandado, el juez, previo consentimiento del actor y si lo considera conveniente, podrá ordenar que los bienes secuestrados permanezcan bajo la custodia del demandado, luego de identificados, individualizados e inventariados, sin perjuicio del secuestro de las fijaciones sobre soportes removibles.

El juez deberá poner sellos sobre los bienes identificados, individualizados e inventariados.

- Cumplida la medida cautelar se citará al demandado y el juez dispondrá que comience a correr el término de prueba previsto en el artículo 917 del Código de Procedimiento Civil.

Las medidas cautelares caducarán si dentro del término de quince días de ejecutadas no se propone la demanda en lo principal.

En los casos en que las medidas provisionales sean revocadas o caduquen por acción u omisión del demandante, o en aquellos casos en que posteriormente se determine que no hubo infracción o amenaza de infracción de un derecho de propiedad intelectual, el juez competente ordenará al actor, previa petición del demandado, la indemnización de daños y perjuicios.

Los jueces que no cumplan con lo previsto en el artículo 73 del Código de Procedimiento Civil dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la recepción de la demanda o nieguen injustificadamente la adopción de una medida cautelar, serán responsables ante el titular del derecho por los perjuicios causados, sin perjuicio de la acción penal que corresponda.

- A fin de proteger secretos comerciales o información confidencial, en el curso de la ejecución de las medidas cautelares establecidas en esta Ley, únicamente el juez o el perito o peritos que él designe tendrán acceso a la información, códigos u otros elementos, en cuanto sea indispensable para la práctica de la medida. Por parte del demandado podrán estar presentes las personas que éste delegue y por parte del actor su procurador judicial. Todos quienes de este modo tengan acceso a tales informaciones, quedarán obligados a guardar absoluta reserva y quedarán sujetos a las acciones que ésta y otras leyes prescriben para la protección de los secretos comerciales y la información confidencial.

- Ya sea en la práctica de medidas cautelares o en la actuación de pruebas, podrán intervenir como peritos los funcionarios designados por el IEPI. El juez estará obligado a requerir la intervención pericial de tales funcionarios, a solicitud de parte.
- Los jueces observarán adicionalmente los procedimientos y medidas establecidos en convenios o tratados internacionales sobre propiedad intelectual vigentes en el Ecuador, en cuanto sean aplicables. Los jueces estarán exentos de responsabilidad en los términos del artículo 48 numeral 2 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio ADPIC.

4. MEDIDAS DE FRONTERA

- Los Administradores de Aduana y todos quienes tengan el control del ingreso o salida de mercaderías al o desde el Ecuador, tienen la obligación de impedir que ingresen o se exporten productos que de cualquier modo violen los derechos de propiedad intelectual.

Si a petición de parte interesada no impidieren el ingreso o exportación de tales bienes, serán considerados cómplices del delito que se cometa, sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda.

- Cuando impidieren, de oficio o a petición de parte, el ingreso o exportación de cualquier producto que viole los derechos de propiedad intelectual, lo pondrán en conocimiento mediante informe pormenorizado al Presidente del IEPI, quien en el término de cinco días confirmará o revocará la medida tomada. Confirmada la medida, los bienes serán puestos a disposición de un juez de lo penal.
- Si el Administrador de Aduanas o cualquier otro funcionario competente se hubiere negado a tomar la medida requerida o no se hubiere pronunciado en el término de tres días, el interesado podrá recurrir directamente, dentro de los tres días, posteriores, al Presidente del IEPI para que la ordene.
- Cualquiera de los Directores Nacionales, según el área de su competencia, podrán ordenar a petición de parte, la suspensión del ingreso o exportación de cualquier producto que en cualquier modo viole los derechos de propiedad intelectual.

La resolución se dictará en el término de tres días desde la petición. Si se estima necesario o conveniente, se podrá disponer que el peticionario rinda caución suficiente. Si ésta no se otorgare en el término de cinco días de solicitada, la medida quedará sin efecto.

- A petición de la parte afectada con la suspensión, el Director Nacional del IEPI, según el caso, dispondrá la realización de una audiencia para examinar la mercadería y, si fuere procedente, revocar la medida. Si no la revocare, dispondrá que todo lo actuado se remita a un juez de lo penal.

PERÚ

En el Perú se protegen los derechos de Propiedad Intelectual en tres ámbitos: administrativo, civil y penal, resolviéndose la mayoría de casos en la vía administrativa.

1. TUTELA JUDICIAL

Se puede acudir a la vía civil para que el juez determine la indemnización por daños y perjuicios causados por una infracción de los derechos de Propiedad Intelectual.

En materia penal la autoridad pública competente para la iniciación del procedimiento penal es el Ministerio Público, que es el organismo autónomo del estado que tiene como funciones principales la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, entre otros. En el caso de los derechos de Propiedad Intelectual, es competente la Decimonovena Fiscalía Provincial Penal de Lima y Ad Hoc en Delitos Intelectuales. Asimismo, el INDECOPI a través de la referida Fiscalía, es competente para iniciar procedimientos penales.

El Ministerio Público puede iniciar el procedimiento de oficio (propia iniciativa) cuando existan indicios razonables de la comisión de un delito; o a instancia de la parte agraviada (a raíz de reclamaciones).

En el caso de los delitos contra los derechos de Propiedad Intelectual, los particulares no están legitimados para entablar procesos penales directamente, sino que deben hacerlo a través de la Fiscalía Especializada.

Las penas privativas de la libertad van de dos a cuatro años para los delitos contra la Propiedad Industrial y de dos a ocho años en el caso de delitos contra los Derechos de Autor.

El Código Penal, establece como delitos contra los derechos de Propiedad Intelectual a los siguientes supuestos:

- Uso indebido de producción intelectual – Artículos 216 y 217 del Código Penal;
- Plagio – Artículo 218 del código Penal;
- Exceso de edición o circulación autorizada – Artículo 219 del Código Penal ; y
- Venta o distribución de producción ilícita – Artículo 220 del Código Penal.

En estos casos se prevé la incautación previa de los ejemplares ilícitos y de los aparatos o medios utilizados para la comisión del ilícito. Asimismo, se prevé el allanamiento o descerraje del lugar en que se esté cometiendo el ilícito penal.

2. TUTELA ADMINISTRATIVA

En el Perú la vía administrativa constituye el principal mecanismo de tratamiento de los casos de infracción de los derechos de Propiedad Intelectual, funcionando el INDECOPI como una instancia de justicia administrativa que conoce y resuelve, a través del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, las acciones de infracción en esta materia.

Facultades de Investigación

Las Comisiones y Oficinas del INDECOPI gozan de las facultades necesarias para desarrollar investigaciones relacionadas con los temas de su competencia. Dichas facultades serán ejercidas a través de las Secretarías Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin. Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se lleven a cabo para determinar la apertura de un procedimiento.

Cada Comisión u Oficina del INDECOPI tiene las siguientes facultades:

- a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los registros magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y la estructura de propiedad de las empresas.
- b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones magnetofónicas o grabaciones en video.
- c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24 horas.

Acciones por infracción

En materia de Propiedad Industrial, de acuerdo a lo dispuesto por el Decreto Legislativo 823, sin perjuicio de las acciones civiles y penales a que hubiera lugar, el titular de un derecho de Propiedad Industrial podrá interponer ante el INDECOPI

acción por infracción contra quien infrinja tales derechos. También procede la acción por infracción cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular puedan ser conculcados.

Agotada la vía administrativa, se podrá solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiera lugar. La acción civil prescribe a los dos años de concluido el proceso administrativo.

Las infracciones a los derechos de Propiedad Industrial darán lugar a la aplicación de una sanción de amonestación o de multa, sin perjuicio de las medidas que se dicten para la cesación de los actos de infracción o para evitar que éstos se produzcan.

En materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos, de conformidad al Artículo 173 del Decreto Legislativo 822 establece que, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que se interpongan ante las autoridades judiciales competentes, los titulares de cualquiera de los derechos reconocidos en la legislación sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, o sus representantes, podrán denunciar la infracción de sus derechos ante la Oficina de Derechos de Autor en su condición de Autoridad Administrativa Competente; no constituyendo esta última, en ninguno de los casos, vía previa.

Se considera infracción la vulneración de cualquiera de las disposiciones contenida en la Ley. A requerimiento del titular del respectivo derecho o de la sociedad de gestión colectiva que lo represente, la Autoridad Policial, comprobará, de inmediato, la comisión de cualquier acto infractorio de la Ley, entregando copia de la constatación al interesado.

Por otra parte, conforme el artículo 241 incisos c) y f) de la Decisión 486, el demandante o denunciante puede pedir que se ordene el retiro de los circuitos comerciales de los productos resultantes de la infracción, incluyendo los envases, embalajes, etiquetas, material impreso o de publicidad u otros materiales, así como los materiales y medios que sirvieran predominantemente para cometer la infracción. También podrá pedir la adopción de las medidas necesarias para evitar la continuación o la repetición de la infracción, incluyendo la destrucción de los productos materiales o medios referidos.

Cuando los hechos materia del procedimiento administrativo constituyan presunto delito, la Oficina de Derechos de Autor podrá formular denuncia penal ante el Ministerio Público.

La Oficina de Derechos de Autor está facultada para imponer las sanciones que correspondan a las infracciones del derecho de autor y derechos conexos protegidos en la legislación, de acuerdo a la gravedad de la falta, la conducta del infractor a lo largo del procedimiento, al perjuicio económico que hubiese causado la infracción, al provecho ilícito obtenido por el infractor y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, considere adecuado adoptar la Oficina.

En virtud de lo señalado por el artículo 17 del Decreto Ley N° 25868 las resoluciones que expida el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (segunda y última instancia administrativa), podrán ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia, ante la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Las resoluciones que expida la referida Sala podrán ser apeladas, en segunda instancia, ante la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia.

Cabe agregar que las resoluciones emitidas por las Comisiones, Oficinas o Tribunal del INDECOPI, se ejecutarán inmediatamente, sin perjuicio que el interesado interponga los recursos impugnatorios que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la ejecución cuando lo dispusiera expresamente el Tribunal del INDECOPI o la Corte Suprema del Poder Judicial.

3. MEDIDAS CAUTELARES

De acuerdo al Artículo 608 del Código Procesal Civil, todo juez puede, a pedido de parte, dictar medidas cautelares (medidas provisionales) antes de iniciarse un proceso o dentro de éste, destinadas a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva.

Las medidas cautelares se dictan por cuenta y bajo responsabilidad del denunciante. Se puede solicitar en la vía civil la indemnización de los daños y perjuicios a que hubiere lugar como consecuencia de las medidas cautelares dictadas.

La adopción de esas medidas inaudita altera parte, es una de las características de las medidas cautelares (medidas provisionales) y tiene como objetivo asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. En virtud del Artículo 611 del Código Procesal Civil, el juez, siempre que de lo expuesto y prueba anexa considere verosímil el derecho invocado y necesaria la decisión preventiva por constituir peligro la demora del proceso o por cualquier otra razón justificable, dictará medida cautelar en forma solicitada o la que considere adecuada atendiendo a la naturaleza de la pretensión principal.

El Artículo 610 del Código Procesal Civil señala que el que solicita la medida cautelar (medida provisional) debe exponer ante el juez, los fundamentos de su pretensión cautelar (debiendo acreditar la apariencia del derecho invocado y el peligro en la demora); señalar la forma de ésta; indicar si fuera el caso, los bienes sobre los que deben recaer la medida y el monto de su afectación ofrecer contracautela y designar el órgano de auxilio judicial correspondiente.

Para mantener en aplicación la medida cautelar, a pedido del titular de la medida y en cualquier estado del proceso, puede variarse ésta, sea modificando su forma o variando los bienes sobre los que recae o su monto.

Finalmente, cabe mencionar que toda medida cautelar importa un prejuzgamiento y es provisoria, instrumental y variable y que el Código Procesal Civil, en su artículo 613, contempla la figura de la contracautela, que tiene por objeto asegurar al afectado con una medida cautelar, el resarcimiento de los daños y perjuicios que pueda causar su ejecución

Por otra parte, el Artículo 27 del Decreto Legislativo N° 807, establece que en cualquier etapa del procedimiento de oficio o a pedido de parte, el INDECOPI podrá dictar una o varias de las siguientes medidas cautelares:

- La cesación de los actos materia de denuncia;
- El comiso, el depósito o la inmovilización de los productos, etiquetas, envases y material publicitario materia de la denuncia;
- El cese preventivo de la publicidad materia de la denuncia;
- La adopción de las medidas necesarias para que las autoridades aduaneras impidan el ingreso al país de los productos materia de denuncia;
- El cierre temporal del establecimiento del denunciado;
- Cualquier otra medida que evite que se produzca algún perjuicio.

Asimismo, el Artículo 198 del Decreto Legislativo N° 822 señala que el juez, a instancia del titular del respectivo derecho, de su representante o de la sociedad de gestión correspondiente ordenará la práctica inmediata de las medidas cautelares necesarias para evitar que se cometa la infracción o que se continúe o repita una violación ya realizada, y en particular las siguientes:

- Embargo de los ingresos obtenidos por la actividad ilícita o, en su caso de las cantidades debidas por concepto de remuneración;
- La suspensión inmediata de la actividad de fabricación, reproducción, distribución, comunicación o importación ilícita según proceda;
- El secuestro de los ejemplares producidos o utilizados y el del material o equipos empleados para la actividad infractora.

Adicionalmente, se puede solicitar y conceder una medida cautelar no prevista pero que asegure de la forma más adecuada el cumplimiento de la decisión definitiva.

En el ámbito administrativo, no existe un procedimiento especial para la adopción de medidas provisionales. Estas deben ser solicitadas al interior de un procedimiento de acción por infracción de derechos de propiedad intelectual (cabe mencionar que el procedimiento de acción por infracción puede también iniciarse cuando exista peligro inminente de que los derechos del titular pueden ser conculcados).

4. MEDIDAS DE FRONTERA

Los artículos 250 al 256 de la Decisión 486 también regulan las medidas que puedan tomarse en la frontera para suspender la importación de productos con marcas falsas. La Intendencia de Fiscalización Aduanera de ADUANAS, inmoviliza los contenedores que contienen productor presuntamente infractores en los terminales aduaneros, antes de su despacho. Se pone en conocimiento de INDECOPI y se solicita su participación para determinar si efectivamente son productos infractores.

INDECOPI ha suscrito un Convenio de intercambio de información con las Autoridades de Aduana, herramienta que viene siendo utilizada a fin de obtener información sobre mercancía que arriba a puerto y que pudiera vulnerar la legislación sobre derechos de autor.

Han sido frecuentes las intervenciones que la Oficina de Derechos de Autor del INDECOPI – de oficio y a petición de parte -, ha realizado en el interior de los terminales de despacho aduanero, lográndose incautar ejemplares ilícitos.

Las autoridades de Aduana, de acuerdo con sus procedimientos y manuales, sólo pueden inmovilizar aquellos contenedores sobre los cuales se tenga información que podrían contener mercancías infractoras, en cuyo caso da aviso al INDECOPI, para que proceda de acuerdo con sus atribuciones.

Las medidas en frontera pueden ser solicitadas ante el órgano administrativo correspondiente, en nuestro caso el INDECOPI, dentro de un proceso de acción por infracción de derechos de Propiedad Intelectual. Asimismo, pueden ser solicitadas como medida cautelar al interior de un proceso civil o penal.

En virtud de lo señalado por el artículo 250 de la Decisión 486, el titular de un registro de marca, que tuviera motivos fundados para suponer que se va a realizar la importación o exportación de productos que infringen ese registro, podrá solicitar a la autoridad nacional competente suspender esa operación aduanera.

VENEZUELA

1. TUTELA JUDICIAL

La tutela judicial de los derechos de propiedad Intelectual en Venezuela se halla ejercitada por los jueces civiles y por los jueces penales, según las disposiciones contempladas tanto en la Ley de Propiedad Industrial de 1955 como en la Ley sobre el Derecho de Autor de 1993 y el Decreto Reglamentario de esta última, el Decreto 618 de 1995.

Ley de Propiedad Industrial

En materia de Propiedad Industrial la protección se orienta básicamente por la vía penal ya que, según el Artículo 97 de la Ley de Propiedad Industrial, además de los delitos contra la propiedad industrial previstos y castigados en el Código Penal, son también punibles los hechos siguientes y sus autores:

- Los que atenten contra los derechos del legítimo titular o poseedor de una patente, fabricando, ejecutando, transmitiendo o usando con fines industriales y de lucro, sin el consentimiento expreso o tácito de aquel, copias dolosas y fraudulentas del objeto de la patente, serán castigados con prisión de uno a doce meses.
- La misma pena será aplicable al que, para perjudicar los derechos o intereses del legítimo poseedor, use, fabrique o ejecute marcas, modelos o dibujos registrados u otros que con éstos se confundan.
- El que dolosamente designe un establecimiento como sucursal de otro que tenga denominación comercial registrada conforme a esta ley, será castigado con prisión de uno a doce meses.
- Quien dolosamente se aproveche de las ventajas de una reputación industrial o comercial adquirida por el esfuerzo de otro que tenga su propiedad al amparo de la presente Ley, será castigado con prisión de uno a doce meses.

Serán castigados con multa:

1. Los que sin haber obtenido una patente o sin gozar de los privilegios de la misma, la invoquen como si disfrutasen de ella;
2. Los que usen una marca, dibujo o modelos industriales sin tener el correspondiente certificado de registro e indiquen que la marca, dibujo o modelo, están registrados;
3. Los que tengan una marca registrada clase de productos y la apliquen como marca registrada para productos pertenecientes a una clase diferente, y

4. Los que, en forma dolosa, pretendan mantener como válido un registro que haya perdido sus efectos de acuerdo con la declaración pública de la autoridad competente. En caso de reincidencia, la pena señalada en el presente artículo se convertirá en prisión proporcional.

La acción penal no podrá ser ejercida sino a instancia de parte agraviada.

En toda sentencia condenatoria por delito contra la propiedad industrial, se ordenará la destrucción de los instrumentos que hayan servido o estuvieren preparados para la comisión del delito, así como los objetos que provengan del mismo.

Ley del Derecho de Autor

Son competentes para conocer de los asuntos relativos al derecho de autor y demás derechos protegidos los Juzgados de Primera Instancia en lo Civil o de Primera Instancia en lo Penal, según corresponda.

Acciones civiles

El titular de cualquiera de los derechos de explotación previstos en esta Ley, que tuviere razón para temer el desconocimiento de sus derechos o que se continúe o se reincida en una violación ya realizada, podrá pedir al Juez que declare su derecho y prohíba a la otra persona su violación, sin perjuicio de la acción por resarcimiento de daños morales y materiales que pueda intentar contra el infractor. Para la efectividad de la prohibición el Juez conminará en la sentencia con multa al ocurrir una contravención. El Juez impondrá la sanción a solicitud de la parte agraviada. En caso de reincidencia, se podrá imponer el doble de la multa.

El titular de uno de los derechos de explotación previstos en esta Ley y que resulte lesionado en su ejercicio, podrá pedir al Juez que ordene la destrucción o retiro de los ejemplares o copias ilícitamente reproducidos y de los aparatos utilizados para la reproducción, siempre que éstos últimos, por su naturaleza, no puedan ser utilizados para una reproducción o comunicación diferente. Queda a salvo, en su caso, la acción por la indemnización de los daños y perjuicios causados al titular de los derechos.

Sanciones penales

Siempre que el hecho no constituya un delito más grave previsto en el Código Penal u otras leyes, será castigado con prisión de seis a dieciocho meses, todo aquel que con intención y sin tener derecho a ello, emplee el título de una obra o comunique en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas, equiparadas a la fotografía; o distribuya ejemplares de obras del ingenio protegidas por la Ley, inclusive de ejemplares de fonogramas; o retransmita una emisión de radiodifusión sin el consentimiento del titular del respectivo derecho.

Será penado con prisión de uno a cuatro (4) años, todo aquel que con intención y sin derecho reproduzca en forma original o elaborada, íntegra o parcialmente, obras del ingenio, ediciones de obras ajenas o de textos, o fotografías o productos obtenidos por un procedimiento similar a la fotografía o imágenes impresas en cintas cinematográficas equiparadas a la fotografía; o quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación reproducciones ilícitas de las obras del ingenio o productos protegidos por la Ley.

En la misma pena incurrirá todo aquel que intencionalmente y sin derecho, reproduzca o copie, por cualquier medio, la actuación de un intérprete o ejecutante, o un fonograma, o una emisión de radiodifusión, en todo o en parte, sin autorización expresa del titular del derecho respectivo, sus derechohabientes o causahabientes, o a quien introduzca en el país, almacene, distribuya, venda o ponga de cualquier otra manera en circulación dichas reproducciones o copias.

Las penas previstas en la Ley sobre el Derecho de Autor, se aumentarán en la mitad cuando los delitos señalados sean cometidos respecto de una obra, producto o producción no destinados a la divulgación, o con usurpación de paternidad, o con deformación, mutilación u otra modificación de la obra, producto o producción que ponga en peligro su decoro o la reputación de una de las personas protegidas por la Ley.

2. TUTELA ADMINISTRATIVA

Las infracciones a la Ley sobre el Derecho de Autor o a su Reglamento, que no constituyan delito, serán sancionadas por la Dirección Nacional del Derecho de Autor, previa audiencia del infractor, con multa. A tal efecto, se notificará al presunto responsable, emplazándolo para que dentro de un plazo de quince días ofrezca las pruebas para su defensa. En caso de reincidencia, que se considerará como tal la repetición de un acto de la misma naturaleza en un lapso de un año, se podrá imponer el doble de la multa.

La Dirección Nacional del Derecho de Autor podrá exigir de las personas naturales o jurídicas que utilicen obras, productos o producciones objeto de la protección legal, toda la información que sea necesaria y ordenar informes, experticias o auditorias, en cuanto sean necesarias para la comprobación de los hechos que puedan dar lugar al goce o el ejercicio de los derechos protegidos por la Ley.

De las decisiones de la Dirección Nacional del Derecho de Autor se podrá apelar ante el Ministerio al cual esté adscrita dicha Dirección, en los plazos y mediante el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

En igual forma, el titular de un derecho de comunicación pública puede por sí o por medio de la entidad de gestión que administre el repertorio correspondiente, solicitar del Alcalde del Municipio, de la autoridad competente para el control de espectáculos o de aquella a quien corresponda la inspección de la respectiva modalidad de comunicación pública, que prohíba dicha comunicación a quien no

acredite, por escrito, la condición de cesionario o titular de la licencia de uso del respectivo derecho. La autoridad prohibirá la comunicación si el responsable de la misma no acredita la cesión o la licencia, sin perjuicio de la facultad de la parte interesada de dirigirse a la autoridad judicial para que tome las medidas definitivas de su competencia.

Son competentes para conocer y resolver sobre la acción administrativa:

1. El Alcalde del Municipio en cuya jurisdicción se realice la comunicación pública no autorizada.
2. La autoridad competente para el control y la inspección del espectáculo donde se utilicen obras, interpretaciones, ejecuciones, producciones o emisiones protegidas por la Ley.
3. La autoridad con competencia en materia de telecomunicaciones, a quien corresponda la facultad de autorizar y vigilar las transmisiones o de suspender aquellas que se realicen con infracción a disposiciones legales.
4. Cualquier otra autoridad a quien competa la inspección de la respectiva modalidad de comunicación pública.

3. MEDIDAS CAUTELARES

El Juez podrá decretar el secuestro de todo lo que constituya violación del derecho de explotación. El Juez podrá ordenar también el embargo de los productos que correspondan al titular del derecho de explotación litigioso. Las medidas de secuestro y embargo sólo se decretarán si se acompaña un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama.

El mismo Juez levantará las medidas a solicitud de la parte contra quien obren, al vencimiento de treinta días continuos, desde su ejecución, si no se le hubiese comprobado la iniciación del juicio principal. Las pruebas y medidas serán practicadas por el Juez que las decretare, por su comisionado o por la autoridad policial a quien el Juez requiera para ello, con la intervención, si fuere necesario, de uno o más peritos designados en el decreto respectivo o por decreto del Juez comisionado.

Si hubiere litigio entre las partes, las pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de la causa. Pero si la urgencia lo exigiere, podrán ser decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutarlas, cualquiera que sea la cuantía. En tal caso, la parte contra quien obre podrá reclamar de la misma ante el Juez de la causa, sin que ello obste a la práctica de la prueba o la ejecución de la medida. Si no hubiere litigio entre las partes, dichas pruebas y medidas serán decretadas por el Juez de Parroquia o Municipio del lugar donde deba ejecutárselas si su urgencia lo exigiere, sin que el propietario, poseedor, responsable, administrador u ocupante del lugar donde deban efectuarse pueda oponerse a su práctica o ejecución.

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 351, el Juez competente, además de las medidas cautelares contempladas en la Ley sobre el Derecho de Autor, podrá ordenar el cese inmediato de la actividad ilícita, así como cualquiera otra medida cautelar de las previstas en el Código de Procedimiento Civil.

4. MEDIDAS DE FRONTERA

En la Ley de Propiedad Industrial ni en la Ley sobre Derecho de Autor, no se han identificado este tipo de medidas; no obstante se debe entender que en este campo obran las medidas contempladas por la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, la cual se halla reglamentada por el Decreto 618 de 1995.

II.2. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

1. La protección de los derechos de propiedad intelectual, o dicho de otra manera, la observancia de las normas vigentes en esta materia, es un tema en el que los países andinos, de una u otra manera, presentan características similares. A pesar de contar con una legislación suficiente e instituciones dedicadas a la administración de la Propiedad Intelectual, las realidades de informalidad económica y marginalidad social que actúan como telón de fondo en todos estos países, determinan una frágil comprensión y un limitado respecto de este tipo de derechos, habiéndose generado, por el contrario, una especie de cultura de la “piratería”, bien tolerada por la sociedad y el Estado.
2. No obstante lo anterior, todos los países andinos -con diferentes niveles de esfuerzo y éxito- están empeñados en revertir esta situación, mediante políticas y acciones orientadas a lograr una mayor y efectiva protección de los derechos de Propiedad Intelectual y la difusión de su importancia para el desarrollo de la creatividad como generadora del progreso. Algunos, ya han conseguido importantes resultados en sus campañas contra la piratería, las infracciones y los actos de competencia desleal contra los derechos.
3. En materia de tutela judicial, en todos los países andinos se consideran las infracciones o violaciones a los derechos de Propiedad Intelectual como delitos, pudiéndose recurrir, en consecuencia, a la vía penal para perseguir este tipo de actos. En realidad, la jurisdicción penal es la más utilizada como mecanismo de represión ante actos ilícitos de Propiedad Intelectual. Sin embargo, son conocidas y comunes en todos los países las complejidades que implica el desarrollo de este tipo de procesos, por la necesidad de plena prueba sobre la culpabilidad del imputado, al margen del costo en tiempo y recursos que los mismos procesos demandan.

En cuanto a la responsabilidad civil para el resarcimiento de daños, esta va aparejada y puede emerger también de la acción penal, o ser objeto de una acción específica ante la jurisdicción civil ordinaria.

En el caso de Colombia, que tiene desarrollado un completo sistema de jurisdicción contencioso – administrativo, las acciones de Propiedad Intelectual pueden ser ejercitadas ante los Jueces y Tribunales de Circuito y pueden llegar en casación hasta el Consejo del Estado.

4. En forma previa, complementaria o alternativa, algunos países andinos han desarrollado y fortalecido la vía administrativa, en cuyo marco han establecido jurisdicción y procedimiento para el conocimiento y resolución de acciones de infracción y competencia desleal en el ámbito de la Propiedad Intelectual, dando lugar a una verdadera jurisdicción administrativa especializada en esta materia.

Caso notable es el de INDECOPI del Perú, que ha desarrollado en su estructura todo un Tribunal que conoce este tipo de acciones y en alguna medida en el IEPI del Ecuador, lo que les permite una mayor efectividad en la lucha contra la piratería y otras prácticas desleales. En los otros países, las medidas de tutela administrativa tienen algunas expresiones importantes, salvo el caso de Bolivia donde la única intervención de carácter administrativo se reduce a la actuación en procesos de conciliación en materia de Derecho de Autor.

5. Son indudables las ventajas de la vía administrativa, tanto por su simplicidad, sus plazos más cortos y la inversión de la carga de la prueba, como por los principios de legalidad y debido proceso que caracterizan el moderno procedimiento administrativo, que si bien permite actuar a la autoridad administrativa en forma oportuna y eficaz, someten su intervención a normas y procedimientos preestablecidos, reduciendo las posibilidades de discrecionalidad y abuso. Además está la posibilidad de impugnar los actos y resoluciones administrativas ante instancias especializadas vinculadas a la temática técnica, sin descartar la eventual intervención de la autoridad judicial una vez agotada la vía administrativa.

Lo interesante en esta nueva dimensión de tutela administrativa de los derechos de Propiedad Intelectual, es que las potestades de intervención de la autoridad, tanto preventivas como correctivas, más que en las legislaciones nacionales, se hallan sustentadas en la previsiones contenidas en el ADPIC/OMC y particularmente en las Decisiones 486 y 351 de la Comunidad Andina, que establecen el Régimen Común sobre Propiedad Industrial y el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, respectivamente.

6. En cuanto a medidas preventivas y cautelares, las legislaciones nacionales las contemplan en forma general en el orden civil y penal, siendo competencia de los jueces ordinarios su adopción dentro de los procesos. No obstante, en los países que tienen desarrollada la tutela administrativa, como el Perú y el Ecuador, es posible que estas medidas sean adoptadas, de oficio o a petición de parte, por la autoridad administrativa, permitiéndole no sólo la corrección de conductas lesivas, sino la prevención de las mismas.

Las potestades de vigilancia, inspección e investigación del INDECOPI muestran el alcance de su potestad administrativa que le permite incluso realizar operativos con el apoyo de la fuerza pública.

7. En Bolivia se ha intentado, mediante convenios entre el SENAPI y Ministerio Público, Policía, Cortes de Justicia y Aduanas, una campaña de represión contra la piratería, la que no ha tenido éxito en razón, entre otros motivos, por la ausencia de un respaldo jurídico claro. Este respaldo se podría obtener aplicando las normas de los Regímenes Comunes Andinos y del ADPIC/OMC, a cuyo efecto se requiere de normativa reglamentaria para estos aspectos, que están contenidos en tales Regímenes.

CAPITULO III
MARCO INSTITUCIONAL

III. MARCO INSTITUCIONAL

La jerarquía que ha ido cobrando el tema de la Propiedad Intelectual en el contexto internacional, ha estado aparejada con un desarrollo institucional progresivo, que se refleja en la existencia, sobre todo en países desarrollados, de entidades técnicas de alta especialización.

Este capítulo está destinado a analizar, bajo una metodología común, los perfiles de los órganos nacionales de los países de la Comunidad Andina, competentes en esta materia. De esta manera, se examina la naturaleza institucional de cada uno de ellos, su ubicación en la administración central, su misión, su estructura orgánica y sus principales atribuciones y funciones.

Cabe señalar que en un caso, el de Colombia, el análisis tiene que efectuarse sobre dos instituciones, toda vez que este país mantiene un tratamiento institucional separado, según se trate de la propiedad industrial o del derecho de autor.

Si bien las soluciones institucionales que los países andinos han adoptado en esta materia, obedecen a la realidad institucional y administrativa de cada país, resulta útil la comparación ya que permite visualizar algunas características que pueden ser excelentes referentes a la hora de proyectar una evolución institucional.

Por otra parte, cabe destacar que el alcance y las características de los órganos públicos cuya función es la administración de los regímenes de Propiedad Intelectual, son un reflejo del grado de evolución y aplicación que han logrado estos regímenes. En este sentido, es ilustrativo comprobar el alcance que la acción de algunos órganos competentes tiene, sobre todo en lo que hace referencia a las funciones de vigilancia y tutela administrativa.

Más allá de la descripción de cada uno de los órganos competentes en los países de la Comunidad Andina, este capítulo incluye también algunos comentarios que son el resultado del análisis comparativo.

III.1. ÓRGANOS NACIONALES COMPETENTES

BOLIVIA

1. ÓRGANO NACIONAL COMPETENTE

Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), creado por Ley 1788 de 16 de septiembre de 1997, Ley de Organización del Poder Ejecutivo y reglamentada su organización y funcionamiento mediante D.S. N° 25159 de 4 de septiembre de 1998.

2. NATURALEZA INSTITUCIONAL

El SENAPI es un órgano de derecho público, desconcentrado del Ministerio de Desarrollo Económico, con competencia de alcance nacional, estructura administrativa propia, dependencia lineal del Ministerio de Desarrollo Económico y dependencia funcional del Viceministerio de Industria, Comercio y Exportaciones.

3. UBICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Como Servicio Nacional el SENAPI integra la estructura de la Administración Nacional, constituyendo un órgano operativo desconcentrado bajo la dependencia del Ministerio de Desarrollo Económico.

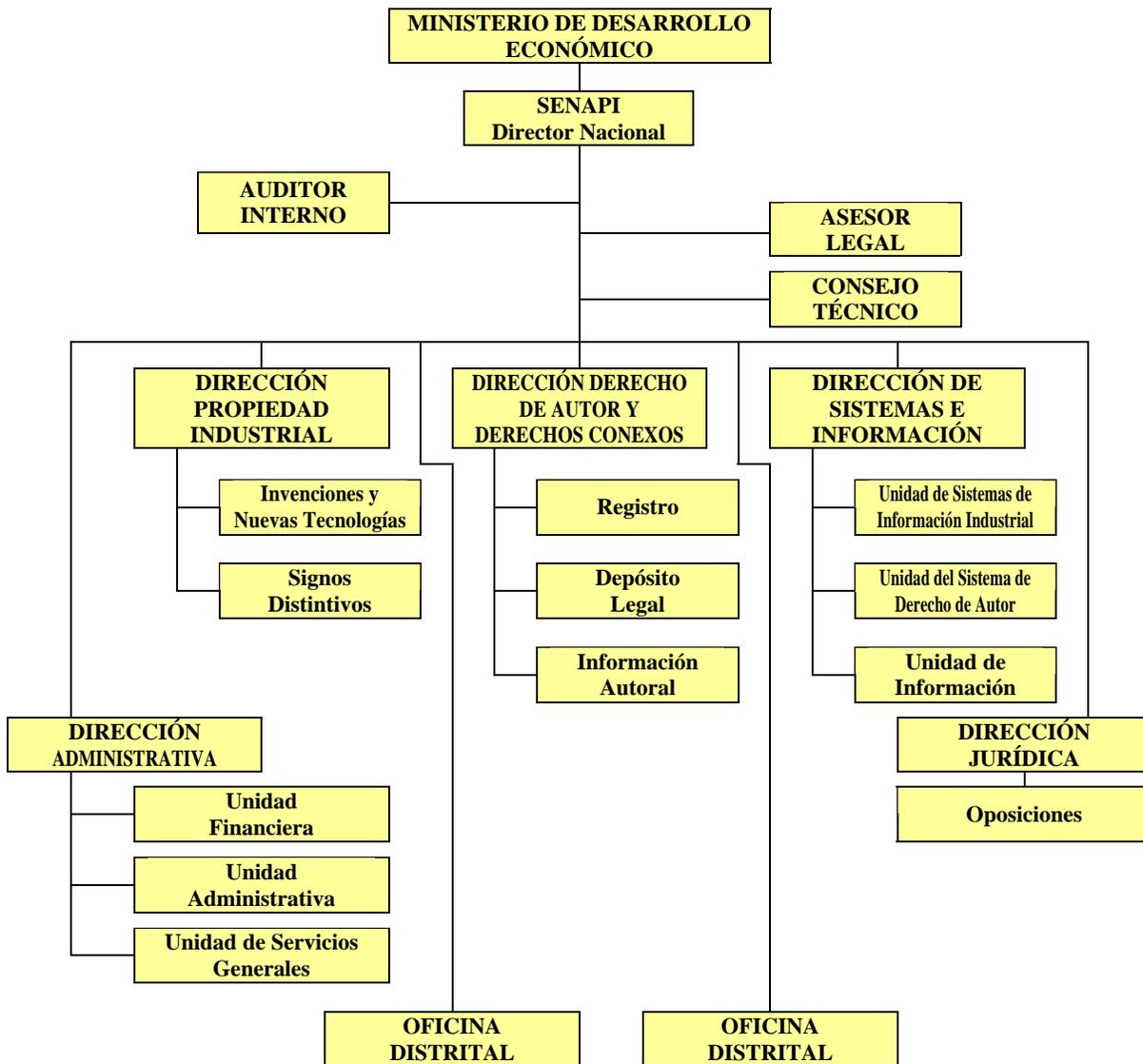
4. MISIÓN

El SENAPI tiene como misión institucional administrar el régimen de Propiedad Intelectual, aplicando las normas de Propiedad Industrial y de Derecho de Autor y Derechos Conexos, a cuyo efecto se constituye en la Autoridad Nacional competente en esta materia.

5. ESTRUCTURA ORGÁNICA

El SENAPI tiene una estructura integrada por los siguientes niveles de organización:

Nivel de Dirección:	Director del Servicio Nacional
Nivel de Coordinación:	Consejo Técnico
Nivel Asesoramiento:	Asesor General
Nivel de Control:	Auditor Interno
Nivel Ejecutivo Operativo:	Directores Técnicos de: Propiedad Industrial Derechos de Autor Sistemas e Información
Nivel de Apoyo Ejecutivo:	Director Administrativo Director Jurídico
Nivel Desconcentrado:	Directores Distritales



6. PRINCIPALES FUNCIONES

El SENAPI, desarrolla sus actividades en dos áreas principales de gestión, la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor y Derechos Conexos.

La Propiedad Industrial comprende los signos distintivos (marcas de fábrica y servicios, marcas colectivas, nombres y lemas comerciales, rotulo de establecimiento, denominaciones de origen); las invenciones y nuevas tecnologías (inventos, modelos de utilidad, diseños industriales, esquema de trazados (topografías), los circuitos integrados; secretos industriales y comerciales (información no divulgada).

El Derecho de Autor y Derechos Conexos comprenden a las obras literarias, artísticas y científicas, así como a los programas de computador (Software), a la reserva y uso de nombre y el depósito legal.

En virtud de lo establecido por el D.S. 25159, se ha excluido de la competencia directa del SENAPI la protección de los derechos derivados de la biotecnología.

Para la protección a los derechos de los obtentores de variedades vegetales, se establece un régimen especial de certificación y registro, diferente del régimen de Propiedad Industrial y del concepto de patentabilidad.

La administración y aplicación de este régimen, está a cargo y bajo responsabilidad del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el que aplicará a la obtención de variedades vegetales las normas de protección establecidas en el ordenamiento jurídico nacional, los convenios internacionales sobre la materia y las normas comunitarias, como la Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena u otras que se puedan adoptar en el marco de los procesos de integración en los que el país participa. A tal fin, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural definirá el órgano o mecanismo operativo encargado de esta competencia.

El órgano competente, designado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, debe notificar al SENAPI las Certificaciones otorgadas, a efectos de una protección coordinada de las variedades vegetales registradas.

La regulación del acceso a los recursos genéticos y la aplicación de la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que estableció el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, se halla bajo la competencia del Ministerio de Desarrollo Sostenible.

Para el desarrollo de su misión y funciones, el SENAPI tiene las siguientes atribuciones:

- Otorgar derechos de exclusiva, brindar protección y seguridad jurídica a los titulares de derechos de Propiedad Intelectual.
- Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y convenios internacionales, en materia de Propiedad Intelectual y su protección.
- Recibir, procesar, registrar, conceder o denegar derechos de Propiedad Intelectual.
- Llevar y mantener los registros nacionales de derechos de Propiedad Intelectual.
- Coordinar la ejecución de las estrategias, políticas, planes y programas para el desarrollo de la protección de los derechos de Propiedad Intelectual.
- Representar al país, por encargo del gobierno, en todas las negociaciones nacionales o internacionales sobre la materia, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

- Publicar todas las solicitudes de registro, notificaciones y resoluciones sobre Propiedad Intelectual, en Gaceta Oficial de Bolivia.
- Elaborar y proponer proyectos normativos relativos a la Propiedad Intelectual.
- Conocer y resolver los procesos de oposición anulación, cancelación, conciliación y arbitraje, sobre los derechos de Propiedad Intelectual.
- Conocer, resolver y sancionar administrativamente las infracciones sobre derechos de Propiedad Intelectual.
- Coordinar con las autoridades administrativas y judiciales la aplicación oportuna de medidas cautelares en defensa de los derechos de Propiedad Intelectual.
- Promover en el área de su competencia, el desarrollo normativo y la transferencia tecnológica en coordinación con las universidades, sector industrial y centros académicos y de investigación tecnológica del país.
- Promover una activa participación de las organizaciones que representen a los titulares de los derechos de Propiedad Intelectual, a fin de establecer mecanismos de coordinación y cooperación para una mejor protección de sus derechos.

COLOMBIA

En Colombia la administración de la Propiedad Intelectual está dividida en áreas institucionales diferentes, siendo necesario, por tanto, desarrollar la descripción del marco institucional para cada área temática.

ADMINISTRACIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

1. ÓRGANO NACIONAL COMPETENTE

De acuerdo con lo previsto en el Decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de Industria y Comercio es la Oficina Nacional competente para la administración de la Propiedad Industrial.

2. NATURALEZA INSTITUCIONAL

La Superintendencia es un organismo de carácter técnico, que goza de autonomía administrativa, financiera y presupuestal y su actividad está orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfacción del consumidor colombiano.

3. MISIÓN

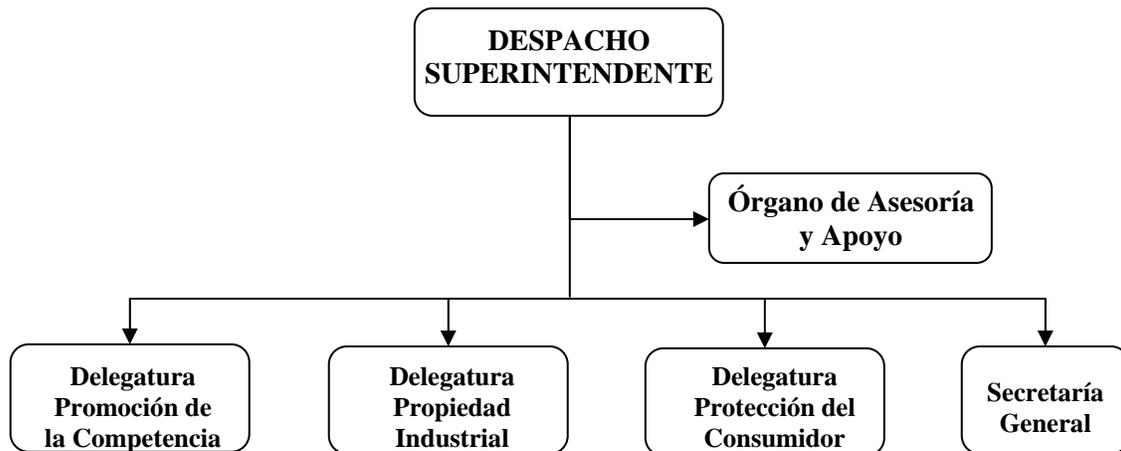
Reconocer oportunamente los derechos de Propiedad Industrial; propiciar la adecuada prestación de los servicios de los registros públicos, cuya administración ha sido delegada a las cámaras de comercio; garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores; fomentar el mejoramiento de la calidad en los bienes y servicios y desestimar la competencia desleal. Asimismo mantener los patrones nacionales de medida para garantizar el nivel metrológico que requieren los agentes económicos y vigilar la operación de las entidades de certificación electrónica.

4. UBICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

La Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra adscrita al Ministerio de Desarrollo Económico y fue creada en desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional en el Artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 1991 y mediante el Decreto 2153 de 1992.

5. ESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

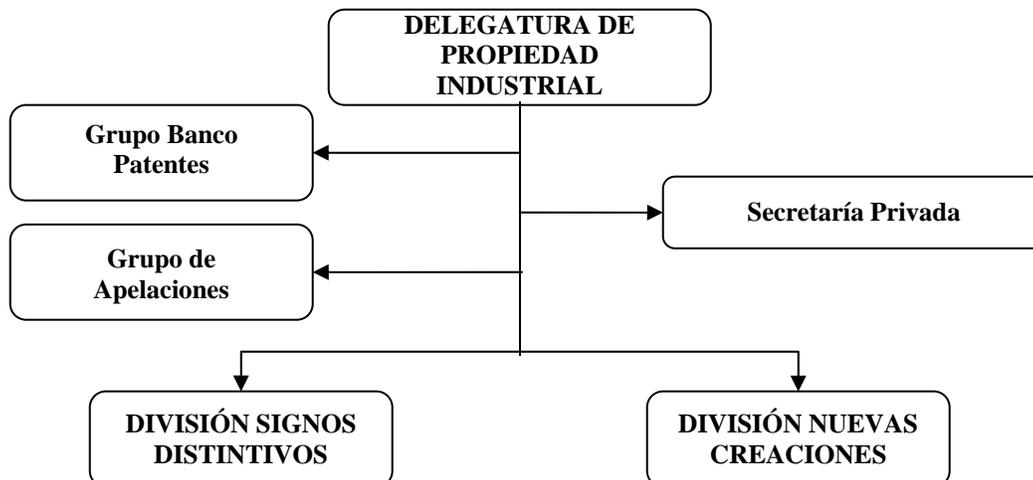
La estructura de la Superintendencia se refleja en el siguiente organigrama:



Las tres áreas que principalmente conforman la estructura de la Superintendencia orientan su labor así:

- la Delegatura para la Promoción de la Competencia, vigila el cumplimiento de las normas que garanticen la libertad de competencia en los mercados;
- la Delegatura para la Protección del Consumidor vigila el cumplimiento de las normas que enmarcan la defensa de los derechos de los consumidores y fomenta el mejoramiento de la calidad de bienes y servicios; y
- la Delegatura para la Propiedad Industrial reconoce los derechos de propiedad industrial (nuevas creaciones y signos distintivos), además de promover la transferencia de información tecnológica.

La Delegatura para la Propiedad Industrial, tiene la siguiente estructura:



6. FUNCIONES Y COMPETENCIA

De acuerdo con lo previsto en el artículo 1 del Decreto 2153 de 1992, le corresponde a la Superintendencia ejercer las siguientes funciones:

- Velar por la observancia de las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas y competencia desleal;
- Controlar y vigilar las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones;
- Coordinar lo relacionado con los registros públicos;
- Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección del consumidor;
- Revisar las decisiones que adopten los operadores de los servicios de telecomunicaciones no domiciliarios; en cuanto a las peticiones, quejas y reclamos que presenten los usuarios y suscriptores de los servicios;
- Organizar y administrar el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología;
- Administrar los programas nacionales de control industrial de calidad, pesas, medidas y metrología;
- Organizar los laboratorios primarios de control de calidad y metrología;
- Fomentar la calidad en los bienes y servicios;
- Administrar el Sistema Nacional de Propiedad Industrial;
- Autorizar la actividad de las entidades de certificación en el territorio nacional, así como velar por su funcionamiento y la prestación eficiente del servicio;
- Inspeccionar, controlar y vigilar las actividades realizadas por las entidades de certificación de firmas digitales en el ámbito del comercio electrónico;
- Integrar y actualizar la lista de evaluadores de bienes; y
- Asesorar al Gobierno Nacional en la formulación de políticas relacionadas con Propiedad Industrial, protección del consumidor y promoción de la competencia.

Los servicios que presta la Superintendencia de Industria y Comercio en materia de propiedad industrial son los siguientes:

- Registro de marcas de productos y servicios y lemas comerciales;
- Renovación del registro de marcas y lemas comerciales;
- Cancelación de un registro marcario;
- Depósito de nombre o enseña comercial;
- Inscripción de cambio de nombre, de domicilio, transferencias y licencia de uso de un signo distintivo;
- Certificación acerca de los trámites o de la titularidad de registro de marcas, lemas, depósito de nombre o enseña comercial;
- Concesión de título de patente de invención;
- Concesión de título de patente de modelo de utilidad;

- Inscripción de cambio de nombre, de domicilio, transferencias y licencia de uso de una nueva creación;
- Registro de diseño industrial;
- Registro de esquema trazado de circuitos integrados;
- Certificaciones referentes a patentes de invención, patentes de modelo de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado;
- Declaración de protección y autorización para el uso de una denominación de origen; y
- Servicios de Banco de patentes: para atender las necesidades de información tecnológica de los sectores productivos y de investigación, dispone de un sistema de información de patentes, el cual permite tener acceso a esa información, para los fines de la selección, adquisición y adaptación de tecnologías y la protección de sus propias innovaciones. Proporciona información tecnológica detallada y suficiente para facilitar y acelerar la investigación científica aplicada, evaluar el estado de la técnica de un área tecnológica específica, preparar una estrategia de protección exitosa de las propias innovaciones e implementar tecnología de punta para la producción.

En cuanto a la competencia específica de la Delegatura para la Propiedad Industrial, los Artículos 14 y 125 de Decreto 2153 la distribuyen de la siguiente manera:

División de Signos Distintivos

Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales, con la renovación de marcas y lemas comerciales y con el depósito de los nombres y enseñas comerciales;

Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidad de las marcas;

Llevar los archivos y registros de los signos distintivos;

Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones a su cargo; y

Preparar el material para la elaboración de la gaceta de la Propiedad Industrial.

División de Nuevas Creaciones

- Tramitar las solicitudes de patentes de invención y de modelo de utilidad;
- Tramitar y decidir las solicitudes de diseños industriales;
- Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias en los casos previstos en la ley;
- Tramitar las licencias de explotación, traspasos, cambios de nombre y domicilio relacionadas con las patentes y con los modelos de utilidad, tramitar y decidir las que correspondan a diseños industriales;
- Estudiar la procedencia de la caducidad de los derechos conferidos por las patentes y modelos de utilidad;
- Llevar los archivos y registros de las patentes y modelos de utilidad;
- Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones de la división; y
- Preparar el material para la elaboración de la gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al área de su cargo.

Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial

- Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por los jefes de las divisiones a su cargo;
- Decidir todas las solicitudes relacionadas con los modelos de utilidad; y
- Decreta la caducidad de los derechos conferidos por patentes de modelo de utilidad.

Superintendente de Industria y Comercio

- Decidir las solicitudes de patentes de invención;
- Otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos previstos por la ley;
- Decretar la caducidad de los derechos conferidos por la patentes de invención; y
- Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por el jefe de la división de signos distintivos, que se refieren a marcas notorias

ADMINISTRACIÓN DE DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

1. ÓRGANO NACIONAL COMPETENTE

La entidad competente es la Dirección Nacional de Derecho de Autor, creada mediante Decreto 2041 de 1991.

2. NATURALEZA INSTITUCIONAL

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, es una Unidad Administrativa Especial, adscrita al Ministerio del Interior, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.

3. MISIÓN

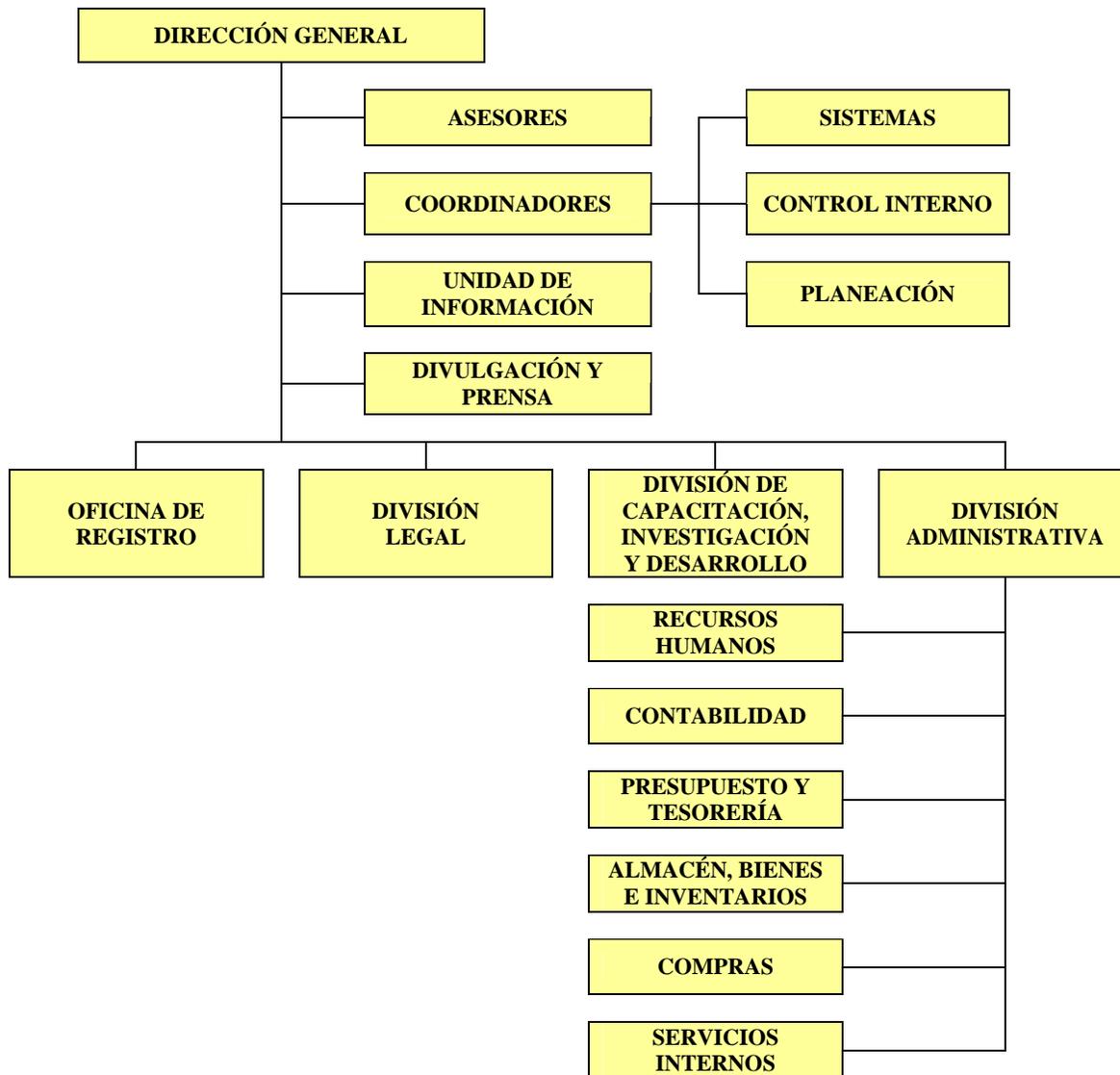
La Dirección Nacional de Derecho de Autor, tiene como misión la administración del régimen y concesión de derechos en materia de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

4. UBICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

La Dirección Nacional de Derecho de Autor, forma parte de la Rama Ejecutiva central, como unidad adscrita a un Ministerio.

5. ESTRUCTURA

La estructura orgánica de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, se refleja en el siguiente organigrama:



6. FUNCIONES

Las funciones y competencias de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, están reglamentadas por el Decreto 2041 de 1991, por el cual se crea la entidad como Unidad Administrativa Especial y por el Decreto 1278 de 1996, por el cual se fija la estructura interna de la entidad y se establecen sus funciones. Entre dichas funciones están las de registro de obras y de actos relacionados con el Derecho de Autor y Derechos Conexos, las de inspección y vigilancia de las sociedades de gestión colectiva y las de difusión y capacitación en el área de los Derecho de Autor y Derechos Conexos.

ECUADOR

1. ÓRGANO NACIONAL COMPETENTE

Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Este organismo dirige de modo general las áreas de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Derechos Conexos y Obtenciones Vegetales, en los ámbitos administrativos, técnicos y operativos.

2. NATURALEZA INSTITUCIONAL

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI), es una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, autonomía administrativa, económica, financiera, y operativa, con sede en la ciudad de Quito.

3. MISIÓN

El IEPI tiene como misión:

- Proporcionar la protección y defensa de los derechos de propiedad intelectual, reconocidos en la legislación nacional y los tratados y convenios internacionales;
- Promover y fomentar la creación intelectual, tanto en su forma literaria, artística o científica cuanto en su ámbito de aplicación industrial, así como la difusión de los conocimientos tecnológicos dentro de los sectores industriales y productivos; y
- Prevenir los actos y hechos que puedan atender contra la propiedad intelectual y la libre competencia, así como velar por el cumplimiento y respeto de los principios establecidos en la Ley.

4. UBICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual – IEPI es una institución descentralizada con autonomía de gestión.

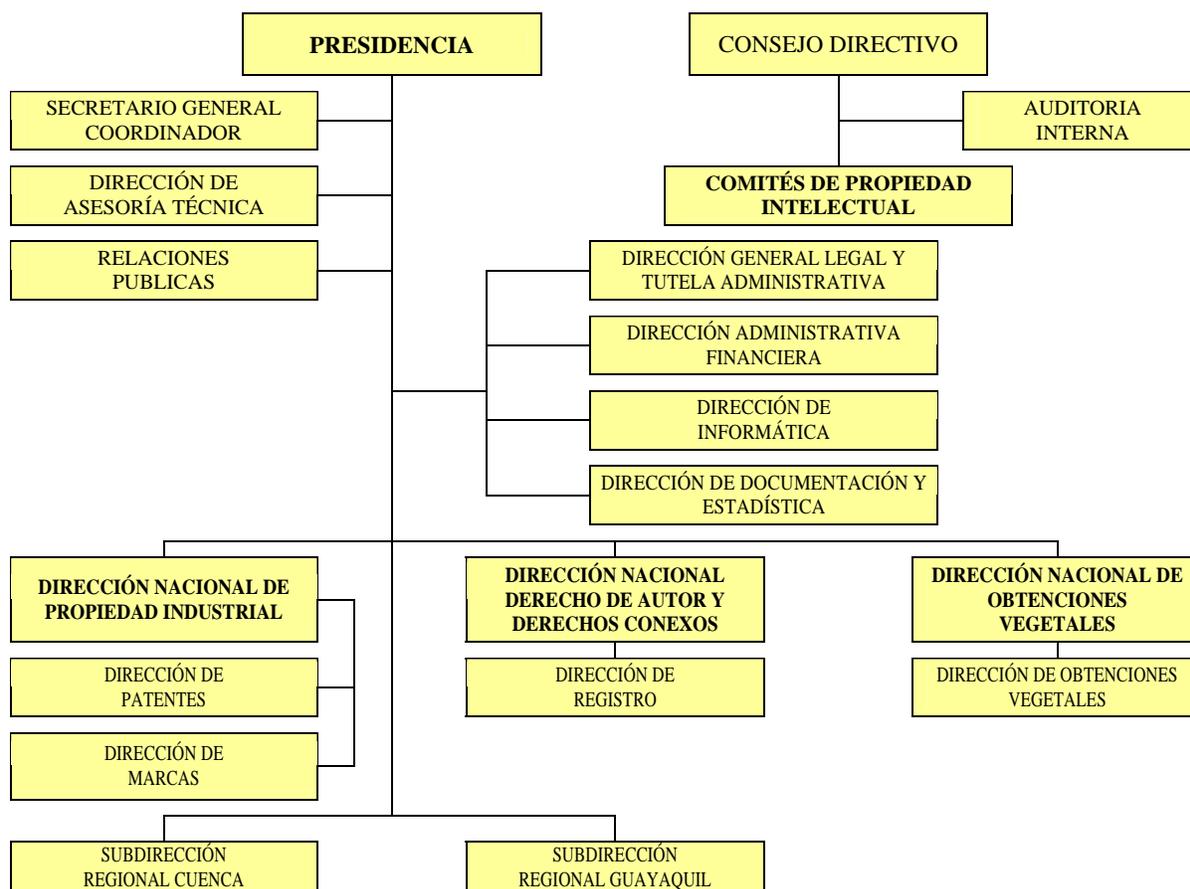
5. ESTRUCTURA

El IEPI tiene la siguiente estructura interna:

- el Presidente
- el Consejo Directivo
- el Comité de Propiedad Intelectual;
- la Dirección Nacional de Propiedad Industrial
- la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos; y
- la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

- El presidente, quien es designado por el Presidente de la República y es el responsable directo de la gestión técnica, financiera y administrativa del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI). Es representante Legal del IEPI.
- El Consejo Directivo, es el órgano contralor y consultor del IEPI, entre sus atribuciones está la de dictar las normas que sean necesarias para el cabal cumplimiento de la ley.
- El Comité de Propiedad Intelectual, Industrial y Obtenciones Vegetales, es competente para tramitar y resolver los recursos de apelación y revisión; y de las solicitudes de cancelación de la concesión o registro de derechos de Propiedad Industrial. Contra las resoluciones del Comité se podrá proponer el recurso administrativo de reposición y se podrá interponer las acciones previstas por la ley de la jurisdicción Contencioso Administrativo.
- La Dirección Nacional de Propiedad Industrial, la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos y la Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales, como órganos ejecutivo técnicos.

La estructura general se refleja en siguiente organigrama:



6. FUNCIONES Y COMPETENCIA

Propiedad Industrial

El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Industrial (IEPI), a través de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial tiene a su cargo la aplicación administrativa de la ley y demás normas legales, convenios y tratados internacional vigentes sobre Propiedad Industrial.

La Ley de la Propiedad Intelectual le asigna a la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial, las siguientes atribuciones:

1. Administrar los procesos de otorgamiento, registro o depósito, según el caso, de patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, lemas, nombres comerciales, apariencias distintas, indicaciones geográficas, esquema de trazados de circuitos semiconductores (topografías) y demás formas de Propiedad Industrial que se establezcan en la legislación correspondiente.
2. Resolver sobre el otorgamiento o negativa de los registros;
3. Tramitar y resolver las oposiciones que se presentaren;
4. Administrar en materia de Propiedad Industrial los demás procesos administrativos contemplados en esta Ley; y
5. Ejercer las demás atribuciones que en materia de Propiedad Industrial se establecen en esta Ley en el Reglamento.

El Registro de Propiedad Industrial es único y confiere un derecho de alcance nacional. El Director Nacional de Propiedad Industrial es la única autoridad competente para la resolución sobre el otorgamiento o designación de registros de propiedad industrial a nivel nacional.

La Dirección Nacional de Propiedad Industrial cuenta con la Dirección de Patentes y la Dirección de Marcas.

La Dirección de Patentes, tramita las solicitudes de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños industriales. Entre las actividades que desarrolla la Dirección de Patentes están las de difusión, promoción y capacitación de la Propiedad Industrial, en este campo.

Dirección de Marcas, tramita las solicitudes de registro de marcas de productos o servicios, marcas colectivas; nombres y lemas comerciales; indicaciones geográficas; apariencias distintivas. La Dirección de Marcas también realiza actividades de difusión asesoramiento y promoción del área.

Direcciones de Apoyo. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial cuenta con la colaboración y apoyo de la Dirección General Legal y Tutela Administrativa, la Dirección de Documentación y Estadística y la Dirección de Informática del IEPI.

Derecho de Autor y Derechos Conexos

La administración nacional competente del Derecho de Autor y Derechos Conexos, está a cargo de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, como parte integrante del Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI).

Las funciones y competencia de la Dirección Nacional de Derecho de Autor y Derechos Conexos, son las siguientes:

- organizar y administrar el Registro Nacional de Derecho de Autor y los Derechos Conexos;
- administrar en materia de derecho de autor y derechos conexos, los procedimientos administrativos comprendidos en la Ley de Propiedad Intelectual;
- aprobar los estatutos de las sociedades de gestión colectiva de derecho de autor y derechos conexos, expedir su autorización de funcionamiento o suspenderla; así como ejercer la vigilancia, inspección y control sobre dichas sociedades e intervenirlas en caso de ser necesario;
- intervenir por vía de la conciliación y arbitraje en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio del derecho de autor y los derechos conexos de conformidad con lo dispuesto en la legislación interna;
- aplicar de oficio o a petición de parte las sanciones contempladas en la Decisión 351 de la Comunidad Andina o en la legislación nacional;+
- desarrollar programas de difusión capacitación y formación en derecho de autor y derechos conexos; y
- ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre actividades que puedan dar lugar al ejercicio del derecho de autor, en los términos establecidos en la ley nacional.

PERÚ

2. ÓRGANO NACIONAL COMPETENTE

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

3. NATURALEZA INSTITUCIONAL

El INDECOPI tiene personalidad jurídica de derecho público y goza de autonomía técnica, económica, presupuestal y administrativa.

4. MISIÓN

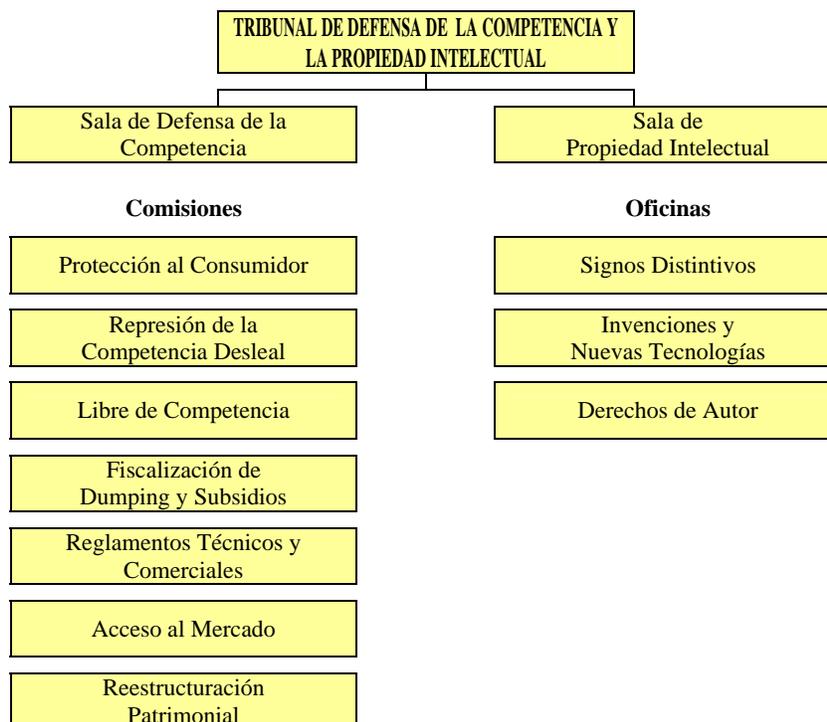
El INDECOPI tiene como misión la administración de los regímenes de defensa de la competencia y la protección de la Propiedad Intelectual, de manera integrada.

5. UBICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

El INDECOPI forma parte de la Presidencia del Concejo de Ministros. Sede Central: Ciudad de Lima , Perú. Sedes descentralizadas: 10 ciudades de mayor importancia a nivel nacional.

6. ESTRUCTURA

La estructura interna del INDECOPI se refleja en el siguiente organigrama:



7. FUNCIONES Y COMPETENCIA

Propiedad Industrial

- La Oficina de Signos Distintivos es el órgano competente para el registro de marcas, nombres comerciales, lemas comerciales y denominaciones de origen y de todos aquellos actos que se deriven de los mismos. Asimismo, se encarga de conocer y resolver, en primera instancia administrativa, los procesos contenciosos derivados de dichos registros (oposiciones, cancelaciones y nulidades), incluyendo los procedimientos por infracción a los derechos de Propiedad Industrial en materia de signos distintivos. Asimismo tiene a su cargo el registro de los contratos de transferencia de tecnología.
- La Oficina de Invenções y Nuevas Tecnologías del INDECOPI, es competente para conocer y resolver en primera instancia administrativa todo lo relativo a patentes de invención, certificados de protección, modelos de utilidad, diseños industriales y circuitos integrados, incluyendo los procesos contenciosos en la vía administrativa sobre la materia. Así mismo tiene a su cargo el listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y franquicia, de origen extranjero. Esta oficina está encargada además, de ejecutar las funciones administrativas vinculadas con el Registro Nacional de Variedades Vegetales Protegidas.

Derecho de Autor y Derechos Conexos

De conformidad con el Artículo 168 del Decreto Legislativo 822 – Ley sobre Derecho de Autor – la Oficina de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI -, es la autoridad nacional Competente responsable de cautelar y proteger administrativamente los Derecho de Autor y Derechos Conexos; posee autonomía técnica, administrativa y funcional para el ejercicio de las funciones asignadas a su cargo y resuelve en primera instancia las causas contenciosas y no contenciosas que le sean sometidas a su jurisdicción, por denuncia de parte o por acción de oficio.

Las atribuciones de la Oficina de Derechos de Autor, que están señaladas en el Decreto Legislativo 822, fundamentalmente son las siguientes:

- a) Orientar, coordinar y fiscalizar la aplicación de las leyes, tratados o convenciones internacionales de los cuales forme parte la República, en materia de derechos de autor y demás derechos reconocidos por la presente ley, y vigilar su cumplimiento.
- b) Desempeñar, como única autoridad competente, la función de autorización de las entidades de gestión colectiva y de ejercer su fiscalización en cuanto a su actividad gestora, en cuanto a los términos de esta ley.

- c) Presentar, si lo considera pertinente, denuncia penal, cuando tenga conocimiento de un hecho que constituya presunto delito.
- d) Actuar como mediador, cuando así lo soliciten las partes, o llamarlas a conciliación, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en esta ley.
- e) Emitir informe sobre los procedimientos penales que se ventilen por los delitos contra el Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- f) Ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre las actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley, estando obligados los usuarios a brindar las facilidades y proporcionar toda la información y documentación que le sea requerida.
- g) Dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de partes todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de los establecimientos.
- h) Establecer, de ser el caso, en los procedimientos sometidos a su competencia, las remuneraciones devengadas a favor de los titulares del derecho.
- i) Desarrollar programas de difusión, capacitación y formación en materia de Derecho de Autor, Derechos Conexos y otros derechos intelectuales reconocidos por esta ley, pudiendo coordinar al efecto con organismos nacionales o internacionales afines a la materia.
- j) Normar, conducir, ejecutar y evaluar las acciones requeridas para el cumplimiento de la legislación de Derecho de Autor y Derechos Conexos y el funcionamiento del Registro Nacional del Derecho de Autor y Derechos Conexos.
- k) Llevar los registros correspondientes en el ámbito de su competencia, estando facultada para inscribir derechos y declarar su nulidad, cancelación o caducidad conforme al Reglamento pertinente.
- l) Llevar el registro de los actos constitutivos de las entidades de gestión colectiva reguladas por esta Ley, así como sus posteriores modificaciones.
- m) Emitir opinión técnica sobre los proyectos de normas legales relativos a las materias de sus competencia.
- n) Sistematizar la legislación relativa al Derecho de Autor y Derechos Conexos y proponer las disposiciones y normas que garanticen su constante perfeccionamiento y eficacia.
- o) Requerir la intervención de la Autoridad Política competente y el auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones.
- p) Promover la ejecución forzosa o cobranza coactiva de sus resoluciones
- q) Proponer y coordinar los programas de cooperación nacional e internacional en el área de su competencia.
- r) Participar en eventos internacionales sobre derecho de autor y conexos.
- s) Las demás que le señalen las leyes y sus reglamentos.

Sistema de Solución de Controversias

El Decreto Legislativo N° 822 establece en su Artículo 169 que la Oficina de Derechos de Autor, cuenta con las atribuciones de ejercer de oficio o a petición de parte, funciones de vigilancia e inspección sobre actividades que puedan dar lugar al ejercicio de los derechos reconocidos en dicho ordenamiento.

Así mismo, la Oficina puede dictar medidas preventivas o cautelares y sancionar de oficio o a solicitud de parte, todas las infracciones o violaciones a la legislación nacional e internacional sobre el Derecho de Autor y Derechos Conexos, pudiendo amonestar, multar, incautar o decomisar, disponer el cierre temporal o definitivo de establecimientos.

También actúa como mediador, cuando así lo soliciten las partes o llamarlas a conciliación, en los conflictos que se presenten con motivo del goce o ejercicio de los derechos reconocidos en la legislación autoral.

VENEZUELA

2. ÓRGANO NACIONAL COMPETENTE

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI).

3. NATURALEZA INSTITUCIONAL

El SAPI es un servicio autónomo adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio.

4. MISIÓN

La misión del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI) se concentra en: a) la concesión efectiva de derechos intelectuales; b) prestación de servicios de información y la promoción tecnológica; y c) difusión de la Propiedad Intelectual.

5. UBICACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL

Ente adscrito al Ministerio de la Producción y el Comercio.

6. ESTRUCTURA

El SAPI comprende tanto el registro de la Propiedad Industrial (SARPI) y la Dirección Nacional del Derecho de Autor (DNDA), adscrita anteriormente al Ministerio de Justicia.

La estructura interna del SAPI se refleja en siguiente organigrama:



7. FUNCIONES Y COMPETENCIAS

Las funciones del SAPI se hallan referidas a la concesión de derechos intelectuales en los siguientes ámbitos:

b) Tecnológico

- Patentes de invención;
- Patentes de Modelo de Utilidad;
- Registros de Diseño Industrial;
- Circuitos Integrados; y
- Certificados de Obtentor de Variedades Vegetales

c) Comercial

- Marcas de Productos y Servicios;
- Marcas Colectivas;
- Marcas de Certificación;
- Nombres Comerciales;
- Lemas Comerciales;
- Denominaciones de Origen; y
- Autorización de Uso de Denominaciones de Origen.

c) Literario científico y artístico

Los derechos conferidos o declarados por el SAPI tienen validez en todo el territorio nacional, toda vez, que este organismo funciona como un Registro Único con una jurisdicción a nivel nacional.

En materia de Derecho de Autor el SAPI a través de la DNDA tiene entre otras atribuciones las de llevar el Registro centralizado de la Producción Intelectual; fiscalizar a las entidades de gestión colectiva; supervisar a las personas naturales o jurídicas que utilicen las obras, productos y producciones protegidas, en cuanto den lugar al goce y ejercicio de los derechos establecidos en la ley; servir de árbitro, conciliador o mediador en los conflictos que presenten entre titulares de derechos, entre las entidades de gestión colectiva, entre éstas y sus miembros, y entre las entidades de gestión o titulares de derechos y los usuarios de las obras, productos o producciones protegidos en la ley; aplicar sanciones a las entidades de gestión colectiva que infrinjan sus propios estatutos o reglamentos, o que incurran en hechos que afecten a los intereses de sus representados; incentivar las industrias culturales y en general cumplir y hacer cumplir la ley y su reglamento.

III.2. ANÁLISIS Y COMENTARIOS

1. La información procesada ha permitido comprobar que en todos los países andinos existen órganos públicos competentes para la administración de los regímenes de Propiedad Intelectual. Sin embargo, la naturaleza de ellos es diversa, mostrando distintos grados de desarrollo institucional y de cobertura de servicios.
2. Salvo el caso de Colombia, país en el que subsiste el manejo separado de la Propiedad Industrial (a cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio) y del régimen de Derecho de Autor y Derechos Conexos (a cargo de una Dirección Nacional del Ministerio del Interior), en todos los demás países se ha adoptado por un manejo integrado de los regímenes de la Propiedad Industrial y del Derecho de Autor, práctica que ha estado propiciada por la OMPI. De esta manera, SENAPI en Bolivia, IEPI en Ecuador, INDECOPI en Perú, y SAPI en Venezuela, exhiben entre sus competencias el manejo de ambos regímenes.
3. En cuanto a la naturaleza institucional, se observa una tipología institucional variada, que va desde un INDECOPI, como entidad adscrita al Congreso de la República en el Perú, hasta órganos integrados o dependientes de un Ministerio como la Dirección del Derecho de Autor en Colombia, pasando por el modelo del SENAPI, IEPI y SAPI, que son entidades con cierto grado de descentralización bajo la tuición de los respectivos Ministerios sectoriales.
4. El nivel o grado de independencia funcional varía de acuerdo a la naturaleza institucional, es así que los grados de autonomía de gestión técnica, jurídica y administrativa están en directa relación con el nivel de descentralización o desconcentración respecto del nivel central de Gobierno.

Resalta el nivel de autonomía de gestión del INDECOPI en el Perú que es, inclusive, una instancia jurisdiccional administrativa.

5. En materia de organización y estructura, los casos con un mayor desarrollo orgánico son los de INDECOPI del Perú, la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia y el IEPI del Ecuador. En el caso de los dos primeros la misión institucional comprende otras arcas de gestión, además de la Propiedad Intelectual, quedando el IEPI, el SAPI y el SENAPI, como modelos de exclusiva dedicación a la Propiedad Intelectual.

La estructura del INDECOPI es la de mayor dimensión, puesto que abarca los temas relativos a la libre competencia y a la competencia desleal, como un régimen paralelo a la Propiedad Intelectual, lo que implica un desarrollo organizacional muy completo.

El caso del IEPI es también relevante por la dimensión de la estructura orgánica y por constituir el único caso en el que también se ha integrado el manejo de otro régimen el de Protección a los Derechos de Obtentores Vegetales, a través de una Dirección Nacional de Obtenciones Vegetales.

En el resto de los casos, se observa un desarrollo de estructura mediana, que se refleja en el tamaño del plantel de funcionarios, salvo el caso de Bolivia, cuyo órgano competente, el SENAPI, ostenta un desarrollo orgánico mínimo.

6. En lo relativo a la competencia y funciones, todos los órganos nacionales cumplen en forma básica las funciones de concesión y registro de derechos de Propiedad Intelectual, desarrollando las tareas de análisis de patentabilidad, de registrabilidad de marcas, de procesamiento de oposiciones de terceros y los actos posteriores al registro. En los casos del Ecuador y Perú, sus órganos nacionales desarrollan en forma orgánica, además, tareas de vigilancia y tutela administrativa en la protección de los derechos de Propiedad Intelectual, siendo menores estas tareas en los casos de Colombia y Venezuela e inexistentes en el caso de Bolivia.

CAPITULO IV

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE EL CASO BOLIVIANO

1. Sobre la Legislación

- Al igual que el resto de países andinos, Bolivia cuenta con legislación suficiente que le permitiría lograr una eficiente administración de la Propiedad Intelectual si se la aplicara en forma efectiva.
- Si bien la legislación básica nacional se halla constituida por sus primeras leyes de patentes y marcas, se aplican en el país -con la misma jerarquía jurídica e incluso con preeminencia sobre aquellas- al igual que en los otros países andinos, las normas de carácter comunitario, provenientes de las Decisiones 486, 351, 345 y 391 de la Comisión de la Comunidad Andina, que son regímenes integrales y compatibilizados con el avance internacional sobre la materia.
- No se considera necesario, por tanto, emitir nueva legislación sustantiva en materia de Propiedad Intelectual, puesto que se crearía duplicidad normativa. Al contrario, sería aconsejable que para evitar superposición y contradicción de normas se proceda a abrogar las antiguas leyes de patentes y marcas, dejando solo como régimen aplicable el vigente en la Comunidad Andina, tomando en cuenta su integralidad y actualidad. De esta manera, además, se logrará mayor estabilidad normativa.
- No obstante, es preciso generar procedimientos operativos para una mejor aplicación de las normas andinas, mediante reglamentaciones que permitan actuar en todos los ámbitos que comprende esta normativa, en especial en el campo de la vigilancia y tutela de los derechos de Propiedad Intelectual en sede administrativa.

2. Sobre la Protección de los Derechos

- La concesión y registro de derechos de Propiedad Intelectual, si bien constituye la base formal de la materia, no tendría sentido por si sola, si no existe la capacidad de garantizar el respeto y la observancia de los derechos otorgados.

La tutela de los derechos de Propiedad Intelectual, constituye por tanto uno de los fundamentos de la materia y se halla expresada como un objetivo esencial en todas las legislaciones nacionales, en la normativa internacional y en la comunitaria andina.

Limitarse, como en el caso de Bolivia, a una simple tarea de registro no cumple con la esencia básica de la Propiedad Intelectual, de la que emergen derechos de

exclusiva como motivadores de la creatividad, de la innovación tecnológica y del desarrollo productivo.

- Todos los países andinos enfrentan problemas de observancia y de proliferación de la piratería, quizá como un efecto del fácil acceso a cierto tipo de tecnología y a la globalización económica, pero la diferencia radica en que algunos de ellos, realizan esfuerzos y se han dotado de los medios para lograr una mayor protección de los derechos.
- A este efecto, la tutela judicial es la que está más disponible y es aplicada mayormente en la vía penal, pero con todas las complejidades que ello implica. Perseguir las infracciones de Propiedad Intelectual sólo por la vía penal, representa un modo difícil, nada oportuno, además de insuficiente, dadas las características de los tribunales de justicia.
- En la realidad de Bolivia, son pocos los casos en los que puede prosperar un proceso penal en esta materia y son escasas, sino nulas, las posibilidades de delegar la lucha contra la piratería al Ministerio Público o a la Policía, ya que estas instancias sólo tienen competencia de investigación. Esta situación se demuestra en la esterilidad de los esfuerzos realizados en Bolivia, mediante convenios con fiscales y cortes de justicia, así como en la constitución de grandes comisiones de defensa de derechos.
- Una solución, si bien puede que no sea total, pero que puede contribuir a mejorar los mecanismos de protección, es el fortalecimiento y uso de la vía administrativa, que sin descartar las vías ordinarias penal y civil, empiece a ejercitar potestad de vigilancia y de conocimiento y resolución de acciones de infracción en sede administrativa, así como de adopción de medidas cautelares y de frontera. Estas potestades éstas expresamente reconocidas por la Decisión 486 de la Comunidad Andina, que deben constituir el marco legal del cual se desprenda este tipo de competencias para la autoridad administrativa.
- Por último, una tarea de difusión, promoción y educación sobre los principios y beneficios de la Propiedad Intelectual es indispensable, con el propósito de asimilar a los valores de la sociedad el respeto de los derechos de exclusiva y crear una cultura nacional de propiedad intelectual, como una de las bases del desarrollo económico y cultural del país.

Bolivia debe asumir el reto de convertir a la Propiedad Intelectual en uno de los factores de su desarrollo con equidad. Debe, asimismo, honrar los compromisos asumidos ante la comunidad internacional y los países de la región y no convertirse en una traba en la dinámica del comercio internacional.

3. Sobre el Marco Institucional

- La importancia y naturaleza de los regímenes Propiedad Intelectual están determinando que todos los países fortalezcan sus órganos nacionales competentes, a fin de dotarles del nivel y capacidad institucional que les permita administrarla con eficiencia e independencia técnica, jurídica y económica. Es por ello visible la tendencia de sacar a estas entidades del área de control e ingerencia política que representa su ubicación en la estructura central de gobierno.
- En el mismo sentido, la calificación de los recursos y de los servicios es un esfuerzo visible en la mayoría de los países, en procura de dotar a sus órganos competentes de la estructura, condiciones de gestión y la adopción de modernos sistemas de tecnología de la información que automatice, simplifique y de seguridad a los trámites.
- La especialización de los recursos humanos constituye un área de atención fundamental, siendo necesario institucionalizar el plantel de funcionarios, con base en la adopción de sistemas de mérito, evaluación del desempeño y capacitación constante, dentro del marco de una estabilidad funcionaria y de la implantación de la carrera administrativa.
- Todos estos aspectos constituyen asignaturas pendientes en el caso de Bolivia, por lo que las necesidades y urgencia del cambio deberían ser enfrentadas con prioridad. En esta perspectiva, el perfil del nuevo SENAPI debería orientarse a los siguientes objetivos:
 - Constituirse en una entidad descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de gestión y presidida con un Directorio ampliamente representativo del sector.
 - Dotarse de una estructura suficiente y eficiente para una gestión que propicie una efectiva protección de los derechos de Propiedad Intelectual, basada en el servicio oportuno y transparente al usuario.
 - Institucionalizar sus recursos humanos, posibilitándoles estabilidad y carrera administrativa y el acceso a una formación y actualización constante.
 - La ampliación de su misión, evolucionando de una función exclusivamente registradora a la efectiva protección de los derechos, mediante el ejercicio de la tutela administrativa.
 - La obtención de recursos físicos, financieros y tecnológicos, que permitan el cumplimiento adecuado de su misión.

ANEXO

***NORMAS VIGENTES EN MATERIA DE
PROPIEDAD INTELECTUAL EN LOS
PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA***

RELACIÓN DE NORMAS VIGENTES EN LOS PAÍSES DE LA COMUNIDAD ANDINA

BOLIVIA

LEGISLACIÓN NACIONAL
<p>A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)</p> <p>Decreto Supremo N° 25159 Establece la organización y funcionamiento del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI)</p>
<p>B. PROPIEDAD INDUSTRIAL</p> <p>Ley de Privilegios Industriales Publicada el 12 de diciembre de 1916, establece el régimen de patentes de invención.</p> <p>Ley Reglamentaria de Marcas Publicada el 15 de enero de 1918, establece el régimen de marcas y otros signos distintivos.</p> <p>Código de Comercio Entre los elementos de la empresa, desarrolla varios capítulos relativos a la Propiedad Industrial: Libro Segundo, Título I, Capítulo III Propiedad Industrial, Capítulo IV Nombre Comercial, Capítulo V Marcas, Capítulo VI Patentes de Invención.</p> <p>Código Penal Establece tipos de delito contra la Propiedad Industrial: Engaño en Productos Industriales (Artículo 236) y Violación de Privilegio de Invención (Artículo 363).</p> <p>Decreto Supremo N° 5470 de 6 de mayo de 1960 Establece períodos de vigencia de las patentes y sus correspondientes anualidades.</p> <p>Decreto Supremo N° 9364 de 27 de agosto de 1970 Establece restricciones a la patentabilidad de productos químicos y biológicos.</p> <p>Decreto Supremo N° 9673 de 19 de abril de 1961 Exceptúa la concesión de patentes industriales nuevas, para procedimientos y sistemas de elaboración de productos químicos, farmacéuticos y dietéticos.</p> <p>Decreto Supremo N 9530 de 12 de febrero de 1972 Establece que todo trámite ante la oficina de Propiedad Industrial estará a cargo de abogado – apoderado.</p>

Decreto Supremo N° 20791 de 10 de mayo de 1985

Dispone la aplicación de la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas establecida por el Arreglo de Niza de 1957.

Decreto Supremo N° 20793 de 10 de mayo de 1985

Establece la vigencia y uso obligatorio de la Clasificación Internacional de Patentes originada en la Convención Europea de 1954.

Decreto Supremo N° 24367 de 18 de octubre de 1996

Modifican algunas normas relacionadas con la Propiedad Industrial.

Decreto Supremo N° 24581 de 25 de abril de 1997

Crea el Comité Interinstitucional de Protección y Defensa de la Propiedad Intelectual.

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**Ley de Derecho de Autor**

Ley N° 1322 de 13 de abril de 1992, establece el régimen de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Decreto Supremo N° 23907 de 12 de julio de 1994

Reglamento de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos.

Código Penal

Tipifica delitos contra la Propiedad Intelectual (Artículo 362), referidos específicamente al Derecho de Autor.

Decreto Supremo N° 24582 de 25 de abril de 1997

Establece el Reglamento del Soporte Lógico o Software

D. VARIEDADES VEGETALES**Ley N° 1968 de 24 de marzo de 1999**

Ratifica la decisión de Bolivia al Convenio de la UPOV.

Decreto Supremo N° 23069 de 29 de febrero de 1992

Crea el Consejo Nacional de Semillas y Regula la Certificación y Fiscalización de Semillas.

Resolución 040/2001 del Ministerio de Agricultura

Establece la competencia y procedimientos de certificación del Programa Nacional de Semillas.

E. RECURSOS GENÉTICOS**Decreto Supremo No. 24676 de 21 de junio de 1997**

Reglamenta la Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, Régimen Común de Acceso a los Recursos Genéticos.

CONVENIOS INTERNACIONALES**A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)****Convenio Constitutivo de la OMPI**

Ratificado por Ley 1438 de 12 de febrero de 1993.

Acuerdo ADPIC/OMC

Ratificado por Ley 1637 de 5 de julio de 1995

Acuerdo de Complementación Económica entre la República de Bolivia y los Estados Unidos Mexicanos (ACE – 31)

Capítulo XVI. Artículos 16-01 al 16-43, relativo a Propiedad Intelectual.

Acuerdo de Complementación Económica entre la República de Bolivia y la República de Cuba (ACE – 47)

Capítulo XI, Artículos 25 al 27 , relativo a Propiedad Intelectual.

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL**Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial**

Ratificado por Ley 1482 de 6 de abril de 1993.

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT)

Ratificado mediante Ley 2498 de 4 de agosto de 2003.

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**Convenio de Berna**

Para la protección de los derechos de los autores sobre sus obras literarias y artísticas. Adhesión por Ley 1439 de 12 de febrero de 1993.

Convenio de Roma

Sobre la protección de los Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión. Adhesión por Ley 1476 de 2 de abril de 1993.

D. VARIEDADES VEGETALES**Convenio UPOV**

Para la Protección de las Obtenciones Vegetales.

NORMAS ANDINAS**A. PROPIEDAD INDUSTRIAL****Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

Que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común de Derecho de Autor y Derechos Conexos

C. VARIEDADES VEGETALES**Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

D. ACCESO A RECURSOS GENÉTICOS**Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común sobre Accesos a los Recursos Genéticos.

COLOMBIA

1. LEGISLACIÓN NACIONAL

A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)

Constitución Política del Estado

La protección de la Propiedad Intelectual en Colombia tiene su principal marco jurídico a nivel de la propia Constitución Política del Estado, cuyo Artículo 61 expresa “El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley”.

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Constitución Política del Estado

El Artículo 150, numeral 24 atribuye al congreso la facultad de “Regular el régimen de Propiedad Industrial, Patentes y Marcas y las otras formas de Propiedad Intelectual. En el mismo sentido, el Artículo 189 de la Constitución Política del Estado que determina las atribuciones del Presidente de la República, en su numeral 27 la facultad a “Conceder patente de privilegio temporal a los autores de invenciones o perfeccionamientos útiles, con arreglo a la ley”. Esta facultad, mediante Decreto 2153 de 1992 fue delegada al Superintendente de Industria y Comercio.

Código de Comercio

Este código dedica a su Título II a la Propiedad Industrial (Art. 534 y siguientes); Patentes de Invención (Art. 572 y siguientes); Dibujos y Modelos Industriales (Art. 583 y siguientes).

Código Contencioso Administrativo

(Decreto 1° de 1984)

Se establece la aplicación de este Código en lo no previsto en los procedimientos especiales.

Decreto 2591 de 13 de diciembre de 2000

Reglamenta varios aspectos en la aplicación del régimen de Propiedad Industrial.

Resolución 701 de 30 de enero de 2000

Fija las tasas vigentes en materia de Propiedad Industrial.

Circular Única N° 10 de agosto de 2001

Recopila bajo un mismo instrumento todas las reglamentaciones e instrucciones de la Superintendencia de Industria y Comercio vigentes.

Resolución 210 de 15 de enero de 2001

Reglamenta definitivamente la normativa relacionada con los trámites y procedimientos de Propiedad Industrial.

Resolución 17585 de 25 de mayo de 2001

Reglamenta procedimientos en materia de licencias obligatorias de patentes.

Decreto 2085 de 2002,

Reglamenta aspectos relacionados con la información suministrada para obtener registro sanitario respecto a nuevas entidades químicas en el área de medicamentos.

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**Ley 23 de 28 de enero de 1982**

Sobre Derechos de Autor

Ley 44 de 1993

Modifica y adiciona la Ley 23 de 1982

Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano

(Artículos 270 a 272)

Tipifica delitos contra el Derecho de Autor.

Ley 719 de 2001

Modifica las Leyes 23 de 1982 y 44 de 1993, sobre Derechos de Autor.

Decreto 1360 de 1989

Reglamenta la descripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional de Derecho de Autor.

Decreto 2041 de 1991

Crea la Dirección Nacional de Derecho como unidad administrativa especial, establece su estructura orgánica y determina sus funciones.

Decreto 460 de 1995

Reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal.

Decreto 162 de 1996

Reglamenta la Decisión Andina 351 y la Ley 44 de 1993, en relación con las Sociedades de Gestión Colectiva de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

Decreto 1278 de 1996

Fija la estructura interna de la Dirección Nacional del Derecho de Autor y establece sus funciones.

Decreto 1721 de 2002

Reglamenta la Ley 719 de 2001

D. VARIEDADES VEGETALES**Resolución N° 1.893 de 1995**

Da apertura al Registro Nacional de Variedades Vegetales, estableciendo el procedimiento para la obtención del Certificado de Obtentor.

2. CONVENIOS INTERNACIONALES

A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)

Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual

Ratificado por Ley 46 de 1979

Acuerdo sobre los Aspectos de Propiedad Intelectual

Relativos al comercio (ADPIC/OMC), ratificado por Ley 170 de 1994.

Tratado de Libre Comercio con México y Venezuela – G3

Que incorpora disposiciones sobre Propiedad Intelectual (Capítulo XVIII), ratificado por Ley 172 de 1994.

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convención General Interamericana sobre Protección Marcaría y Comercial

(Washington, 1929), incorporada por Ley 59 de 1936

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

(Unión de París). Ratificado por ley 178 de 1994

Tratado de Cooperación en Materia de Patentes

(Unión PCT). Aprobado por Ley 463 de 1998

Clasificación Internacional de Niza sobre Marcas

Adoptada según la previsión contemplada en el Artículo 151 de la Decisión 486.

Clasificación Internacional de Locarno, relativa a dibujos y modelos industriales

Adoptada según la previsión contemplada en el Artículo 127 de la Decisión 486

Clasificación Internacional de Estrasburgo relativa a patentes

Adoptada según la previsión contemplada en el Artículo 49 de la Decisión 486

Clasificación Internacional de los Elementos Figurativos de las Marcas

Establecida por el Acuerdo de Viena

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Convenio de Berna

Protección de las Obras Literarias y Artísticas, aprobado por Ley 33 de 1987.

Convenio Universal sobre el Derechos de Autor

Firmado en Ginebra – 1952, aprobado por Ley 48 de 1975.

Convención Internacional para la Protección de Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Productores de radiodifusión

Firmado en Roma – 1961, aprobado por Ley 48 de 1975

Convenio para la Protección de los Productores de Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas

Suscrito en Ginebra – 1971, aprobado por Ley 23 de 1992

Tratado Internacional para el Registro de las Obras Audiovisuales

Suscritos en Ginebra – 1989, aprobado por Ley 26 de 1992.

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor

Firmado en Ginebra – 1996, aprobado por Ley 565 del 2000.

3. NORMAS ANDINAS

A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina

Instituye el Régimen Común de Protección de la Propiedad Industrial

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Instituye el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

C. VARIEDADES VEGETALES

Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Instituye el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

D. RECURSOS GENÉTICOS

Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

Instituye el Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos.

ECUADOR

1. LEGISLACIÓN NACIONAL

A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)

Constitución Política del Estado

En su Artículo 30, último inciso, expresa que “Se reconocerá y garantizará la Propiedad Intelectual, en los términos previstos en la ley y de conformidad con los convenios y tratados vigentes”.

Ley de Propiedad Intelectual

Ley N° 83, publicada en el Registro Oficial N° 320 de 19 de mayo de 1998. Reconoce, regula y garantiza la Propiedad Intelectual, regulando asimismo la competencia desleal y tutela administrativa de los derechos de Propiedad Intelectual.

Reglamento de la Ley de Propiedad Intelectual

Decreto Ejecutivo N° 508 publicado en el Registro Oficial N° 120 de 1 de febrero de 1999.

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Libro II de la Ley de Propiedad Intelectual

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Libro I de la Ley de Propiedad Intelectual

D. VARIEDADES VEGETALES

Decreto N° 3708

Publicado en el Registro Oficial N° 487 de 20 de julio de 1994, reglamentada la Decisión 45 sobre el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

Libro III de la Ley de Propiedad Intelectual

2. CONVENIOS INTERNACIONALES

A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)

Convenio de la OMPI

Resolución del Congreso Nacional de 24 de junio de 1987, ratificada por Decreto Ejecutivo N° 3631 de 7 de enero de 1988, publicado en el Registro Oficial N° 885 de 3 de marzo de 1988.

Acuerdo sobre los ADPIC/OMC

Publicado en el Suplemento del Registro Oficial N° 977-5 de 28 de junio de 1996

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial

Publicado en el Registro Oficial N° 244 de 29 de julio de 1999

Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT)

Publicado en el Registro Oficial N° 431 de 12 de octubre de 2001

Arreglo de Niza. Clasificación Internacional de Marcas

Artículo 215 de la Ley de Propiedad Intelectual y Artículo 151 de la Decisión 486

Arreglo de Estrasburgo. Clasificación Internacional de Patentes de Invención

Artículo 169 de la Ley de Propiedad Intelectual y artículo 127 de la Decisión 486.

Arreglo de Locarno. Clasificación Internacional de los Dibujos o Modelos Industriales

Artículo 169 de la Ley de Propiedad Intelectual y Artículo 127 de la Decisión 486.

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas

Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión

Convenio Fonogramas contra la Reproducción no Autorizada de sus Fonogramas

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WTC)

Ratificados por el Ecuador, hallándose pendiente de publicación en el Registro Oficial

Tratado de la OMPI sobre Interpretación o Ejecución y Fonogramas (WPPT)

Ratificados por el Ecuador, hallándose pendiente de publicación en el Registro Oficial

D. VARIEDADES VEGETALES

Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)

3. NORMAS ANDINAS**A. PROPIEDAD INDUSTRIAL****Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina**

Publicada en el Registro Oficial N° 258 de 2 de febrero de 2001, que establece el régimen Común de Propiedad Industrial.

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos.

C. VARIEDADES VEGETALES**Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales, publicada en el Registro Oficial N° 487 de 20 de julio de 1994.

D. RECURSOS GENÉTICOS**Decisión 391 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común sobre Acceso a los recursos Genéticos, publicado en el Registro Oficial N° 5-S de 16 de agosto de 1996.

PERÚ

1. LEGISLACIÓN NACIONAL

A. PROPIEDAD INTELECTUAL

Decreto Legislativo N° 807

Que establece una nueva reglamentación respecto a las facultades, normas y organización del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI).

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley de Propiedad Industrial

Decreto Legislativo N° 823, publicado el 26 de abril de 1996.

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Ley sobre Derecho de Autor

Decreto Legislativo N° 822, publicado el 24 de abril de 1996

Código Penal

Delitos contra los Derechos de Autor (Artículos 216 a 221)

D. VARIEDADES VEGETALES

Decreto Supremo N° 008-96-ITINCI

Reglamento de Protección a los Derechos de Obtentores de Variedades Vegetales.

E. RECURSOS GENÉTICOS

Decreto Ley N° 27811

Establece el Régimen de Protección de los Conocimientos Colectivos de los Pueblos Indígenas Vinculados a los recursos Biológicos.

2. CONVENIOS INTERNACIONALES

A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)

Convenio de la OMPI

Acuerdo del ADPIC/OMC

Incorporado por Resolución Legislativa N° 26407 de 1995.

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL**Convenio de la París para la Protección de la Propiedad Industrial**

Incorporado por Resolución Legislativa N° 26375 de 1994

Convención General Interamericana de Protección Marcaria y Comercial

Suscrita en Washington 1929

Arreglo de Niza

Clasificación Internacional para el Registro de Marcas

Arreglo de Viena

Clasificación Internacional de los Elementos Configurativos de las Marcas

Arreglo de Estrasburgo

Clasificación Internacional de Patentes

Arreglo de Locarno

Clasificación Internacional para los Dibujos y Modelos Industriales

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS**Convenio de Berna**

Para la protección de obras Literarias y Artísticas.

Convención de Roma

Sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y Organismos de Radiodifusión.

Convención Fonogramas

Para la protección de los productos de fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas.

Convenio Satélites

Sobre la distribución de señales portadoras de programas transmitidos por satélite

Tratado sobre el Registro Internacional de Obras Audiovisuales

Registró de películas

Tratado de la OMPI sobre Derecho de Autor (WCT) y sobre Interpretación Ejecución y Fonogramas (WPPT)

El WCT ha sido incorporado mediante Decreto Supremo 053-2001-RE de 6 de julio de 2001

El WPPT fue incorporado mediante Decreto Supremo 017-2002-RE de 28 de febrero de 2002

3. NORMAS ANDINAS
A. PROPIEDAD INDUSTRIAL Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina Que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial
B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Que establece el Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
C. VARIEDADES VEGETALES Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Que establece el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.
D. RECURSOS GENÉTICOS Decisión 394 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena Que establece el Régimen Común sobre Accesos a los Recursos Genéticos

VENEZUELA

1. LEGISLACIÓN INTERNA

A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999

Artículos 85, 98, 101, 108, 110, 112, 113, 115, 117, 124, 127, 129, 153, 156 (ordinales 15 y 32), 302, 305 y 307.

Decreto de 13 de noviembre de 1996

Crea el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI)

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Ley de Propiedad Industrial de 1955

Establece el régimen de Propiedad Industrial

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Ley sobre el Derecho de Autor de 1° de octubre de 1993

Establece el régimen de Derecho de Autor

Decreto 618 de 26 de abril de 1995

Reglamento de la Ley sobre el Derecho de Autor y de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena

D. VARIEDADES VEGETALES

Ley de Diversidad Biológica

de 24 de mayo de 2000

Reglamento de la Decisión 345

Relativa al Régimen Común de Protección de los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

2. CONVENIOS INTERNACIONALES

A. PROPIEDAD INTELECTUAL (GENERAL)

Convenio que establece la OMPI

Estocolmo, 1967

Acuerdo que establece el ADPIC/OMC

Tratado de Libre Comercio entre México, Colombia y Venezuela (G-3)
Capítulo XVII Propiedad Intelectual (ACE33)

Acuerdo de Complementación Económica entre Cuba y Venezuela
Capítulo XIII de Propiedad Intelectual (ACE 40)

B. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Convenio de París, para la protección de la Propiedad Industrial
(Gaceta Oficial de Venezuela N° 4.882 de 30.02.95)

C. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Convención Universal sobre Derecho de Autor 1952
(Gaceta Oficial N° 1011 de 27.04.66)

Convenio para la Protección de los Productos Fonogramas Contra la Reproducción No Autorizada de sus Fonogramas
(Gaceta Oficial N° 2891 de 23.12.81)

Convenio de Berna para la Protección de las Obra Literarias y Artísticas
(Gaceta Oficial N° 2954 de 11.05.82)

Convención de Roma sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes, los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión
(Gaceta Oficial N° 4968 de 13.09.95)

Convención Universal sobre Derechos de Autor 1971
(Gaceta Oficial N° 38820 de 19.10.95)

3. NORMAS ANDINAS

A. PROPIEDAD INDUSTRIAL

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina
Que establece el Régimen Común sobre Propiedad Industrial

B. DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS

Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena
Que establece el Régimen Común de Derechos de Autor y Derechos Conexos.

C. VARIEDADES VEGETALES**Decisión 345 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común de Protección a los Derechos de los Obtentores de Variedades Vegetales.

D. RECURSOS GENÉTICOS**Decisión 394 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena**

Que establece el Régimen Común sobre Accesos a los Recursos Genéticos